

43ª REUNION — 12ª SESION DE PRORROGA — NOVIEMBRE 16/17 DE 1973

**Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, vicepresidente 1º
del Honorable Senado**

Secretarios: señor **ALDO H. N. CANTONI** y señora **IRMA S. DE CESARETTI**
Prosecretarios: señores **RAFAEL ARANCIBIA LABORDA** y **DELFOR W. CARESSI**

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, Jose Antonio
AVALOS, Pedro Isaac
BARBORA de NASIF, Yamili
BARONI, Danilo Luis
BELENGUER, Emilio
BENI, Juan Carlos E.
BLANCO, Rodolfo E.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo Norvel
BRIZUELA, Hugo Genaro
CACERES, Rubén Osvaldo
CAMPORA, Pedro L.
CANTONI, Apolo
CARNEVALE, Luis
CERRO, Francisco Eduardo
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CHAILLÉ, Juan Carlos
D'AGOSTINO, Lucio Roque
DE LA RUA, Fernando
DÍAZ BIALET, Alejandro
ELÍAS, Florencio
ESPERANZA, Joaquín Horacio
EVANS, Carlos H.
FONROUGE, Alberto M.
FRANCO, Carlos A.
FROIS, Domingo Andrés
FRUGOLI, Amadeo Ricardo
GARCÍA, Américo Alberto
GARCIA, Justino
GRUBISICH, Pablo Eliseo
HERRERA, José Jorge
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario
LUDER, Italo A.
LUNA, Pedro Antonio

MANCINI, Omar A.
MARTIARFNA, José H.
MAYA, Héctor Domingo
MOREIRA, Miguel Orlando
MORENO, Ramón Enrique
MURGUIA, Edgardo P. V.
PENNISI, Afrio
PERETTE, Carlos H.
PERONI, Carmelo
POSE, Jorge Juan
RODRIGUEZ, Ginés Froilán
ROMERO, Humberto Antonio
SAADI, Vicente Leónides
SALMOIRAGHI, José César
SAPAG, Elías
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
VAL, Buenaventura Justo
VALLE de GONZALEZ, Leni Rosa
VIVAS, Angel Juan Gregorio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON AVISO:

BRIZUELA, Guillermo Ramón
CARO, J. Armando
JAURIGUI, Rafael Zenón
LORENZO, Jorge Luis
LORENZO, Ramón
MARTÍNEZ, Julio César
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.
NÁPOLI, Antonio Oscar
PAZ, Eduardo Alberto
PUGLIESE, Juan Carlos
SALAS CORREA, Luis I.

AUSENTES, CON LICENCIA:

ANGELOZ, Eduardo César
HERRERA, Dermidio Fernando L.
MUNIAGURRIA, Camilo

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos. (Página 2252.)

II.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el cual el excelentísimo señor presidente de la Nación solicita permiso para ausentarse del país. (Página 2252.)

III.—Mensaje del Poder Ejecutivo enviando antecedentes sobre el conflicto de poderes en Formosa. (Página 2252.)

IV.—Mensaje del Poder Ejecutivo enviando nuevos antecedentes sobre la situación institucional en Formosa. (Página 2253.)

V.—Dictamen de comisión. (Página 2254.)

2.—A moción del señor senador Saadi se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales por el que se autoriza al excelentísimo señor presidente de la Nación a ausentarse del país. (Página 2254.)

3.—A moción del señor senador Martiarena se resuelve pasar a cuarto intermedio. (Página 2255.)

4.—A moción del señor senador Jauregui se resuelve enviar nuevamente a la Comisión de Educación el dictamen en el proyecto de ley del mismo señor senador sobre creación de la Universidad Nacional de Jujuy. (Página 2255.)

5.—A moción del señor senador Martiarena se resuelve constituir la Cámara en comisión para considerar la situación institucional de Formosa. (Página 2256.)

6.—Consideración en comisión de la situación institucional de la provincia de Formosa. (Página 2256.)

7.—Consideración del proyecto de ley del señor senador Fonrouge sobre intervención a los tres poderes de la provincia de Formosa. Se aprueba con modificaciones. (Página 2277.)

8.—A moción del señor senador Fonrouge se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en los proyectos de ley en revisión, y del señor senador Rodríguez sobre amnistía electoral. (Página 2278.)

9.—Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Página 2279.)

—En Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre de 1973, a la hora 14, dice el

Sr. Presidente (Allende). — Con 36 señores senadores, que constituyen quórum reglamen-

lario, queda abierta la 12ª sesión de prórroga del período ordinario de sesiones.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Allende). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

I

Acuerdos

Mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se solicitan acuerdos. (*A la Comisión de Acuerdos.*)

II

Permiso al excelentísimo señor presidente de la Nación para ausentarse del país. — **Mensaje del Poder Ejecutivo**

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación:

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el correspondiente permiso constitucional para ausentarme del país, en el período comprendido hasta el 31 de diciembre del corriente año, cuando razones de gobierno lo indiquen.

Dios guarde vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.

Sr. Saadi. — Solicito que este mensaje quede reservado en Secretaría.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Allende). — Habiendo asentimiento, así se hará.

III

Conflicto de poderes en Formosa. — **Antecedentes.** — **Mensaje del Poder Ejecutivo**

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad remitiéndole los antecedentes relativos al conflicto de poderes suscitado en la provincia de Formosa.

De los mismos resulta:

1º — Que la Legislatura provincial de Formosa resolvió por unanimidad comisionar a una delegación ad hoc, que se entrevistó con el señor ministro del Interior y que fuera encabezada por el señor vicegobernador de la provincia en su carácter de presidente nato de dicho cuerpo e integrada por representantes de todos los bloques. La referida comisión impuso al señor ministro del Interior acerca del enfrentamiento existente entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia con respecto a diversos episodios, que se consignan en los antecedentes adjuntos. Así mismo, los legisladores comisionados des-

tacaron el consenso existente dentro de la Legislatura en el sentido de la procedencia de la destitución del gobernador por el procedimiento del juicio político.

2º — Que la Legislatura de Formosa sancionó con fecha 16 de octubre de 1973 una ley (número 357) regulando el procedimiento del juicio político que contempla el artículo 110 de la Constitución provincial, y que carecía de reglamentación en la provincia.

3º — Que el Poder Ejecutivo el 29 de octubre de 1973 vetó por decreto 1.975 de la misma fecha el referido texto legal.

4º — Que con fecha 31 de octubre y de acuerdo con el artículo 85 de la Constitución provincial, la Legislatura insistió en su sanción, con lo que quedó convertido en ley.

5º — Que la Legislatura de la provincia de Formosa, con fecha cuatro de noviembre último, aprobó una declaración de repudio con motivo del secuestro del que fuera víctima el diputado doctor Juan de Rosa Benítez, en la que se cuestiona la eficacia del Poder Ejecutivo provincial para garantizar la seguridad de los habitantes de la provincia, la declaración denuncia, así mismo, la circunstancia de que en la provincia se vive una insoportable presión política mediante la utilización de grupos armados que atacan locales partidarios y educacionales de quienes no comulgan con sus posiciones.

6º — Que con fecha 5 de noviembre pasado la Legislatura aprueba una nueva declaración en la que sostiene la inexistencia de conflicto de poderes ni de causal alguna que justifique una intervención federal.

7º — Que con fecha 6 de noviembre del corriente, el señor gobernador de la provincia se dirige al señor ministro del Interior denunciando un nuevo enfrentamiento producido con la Legislatura, a raíz de un pedido formalizado por ésta en el sentido de que el gobernador solicitara una licencia por el término de seis meses.

8º — Que este último episodio determina que el Poder Ejecutivo de la provincia se dirija al señor ministro del Interior solicitando formal y oficialmente se promueva la intervención federal del Poder Legislativo.

9º — Que con fecha 9 de noviembre pasado el gobernador de la provincia anticipa al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, que se interpondrá recurso de inconstitucionalidad preventiva contra la ley del juicio político, por ante el superior Tribunal de Justicia de la provincia, el que quedará de este modo involucrado en el conflicto de poderes.

10. — Que el 4 de octubre de 1973 tuvo entrada en la Legislatura el pedido de desafuero del señor diputado doctor Juan de Rosa Benítez solicitado por el juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado Nº 12 en lo Criminal y Correccional de la provincia a exhorto del juez de Instrucción y Correccional de la Primera Nominación de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, doctor Moisés L. Lavia. La solicitud de desafuero fue girada a estudio de comisión sin que hasta la fecha haya merecido tratamiento; tampoco se tiene conocimiento de la existencia de intervención judicial alguna tendiente a su impulso. Se señala que el desafuero que se requiere lo es a fin de cumplir la condena recaída en una causa seguida por falsificación reiterada de documento público, en grado de instigación. El diputado de Rosa Benítez se desempeñaba —al tiempo del pedido de desafuero— como presidente provisional de la Legislatura.

11. — Que la Legislatura sanciona una ley que el Poder Ejecutivo promulga, por la que se dispone hacer extensivas a la provincia de Formosa, demandando reciprocidad, las inmunidades parlamentarias de que gocen legisladores de otras jurisdicciones.

Se acompaña a este mensaje la documentación reunida por el Poder Ejecutivo acerca de los hechos que configuran el conflicto institucional reseñado.

El Poder Ejecutivo deja librado al criterio de vuestra honorabilidad determinar si el caso planteado encuadra dentro de los supuestos previstos por el artículo 6º de la Constitución Nacional.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.
Benito Llambi.

Sr. Martiarena. — Solicito que se reserve en Secretaría este asunto.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Allende). — Habiendo asentimiento, así se hará.

IV

Situación institucional en Formosa. — Nuevos antecedentes. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad a fin de ampliar su anterior mensaje de fecha 15 de noviembre en curso a fin de dar cuenta de los nuevos hechos suscitados en la provincia de Formosa, referidos a la situación institucional que vive la misma.

Ellos son:

1º — Con fecha 14 del corriente mes el diputado Juan de Rosa Benítez solicitó su propio desafuero y se presentó voluntariamente al juez que lo requería en la provincia del Chaco, siendo acompañado por representantes de todos los bloques y quedando detenido a la orden del mismo.

2º — El día 15 de noviembre, en horas de la noche y no habiendo aún entrado en vigencia la ley reglamentaria del juicio político, la Legislatura resuelve constituirse, con la presidencia del presidente del superior Tribunal de Justicia, y someter a juicio político al gobernador de la provincia, disponiendo su suspensión en el cargo, según lo establece el artículo 113 de la Constitución provincial; a la vez que se resuelve disponer que por escribanía de gobierno se adapten las medidas correspondientes a efectos de la asunción por el vicegobernador.

3º — El Poder Ejecutivo provincial impuesto en la madrugada del día de la fecha de lo resuelto por la Legislatura, se ha dirigido al gobierno nacional insistiendo en su pedido de intervención al Poder Legislativo.

Se acompaña a este mensaje la documentación que ilustra acerca de los hechos nuevos de que se da cuenta.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.
Benito Llambi.

Sr. Martiarena. — Por ser este mensaje complementario del anterior, solicito que también quede reservado en Secretaría.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Allende). — Habiendo asentimiento, así se hará.

V

Dictamen de comisión

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En el mensaje del Poder Ejecutivo por el cual el excelentísimo señor presidente de la Nación solicita permiso para ausentarse del país.

Sr. Saadi. — Solicito que este dictamen quede reservado en Secretaría.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Allende). — Habiendo asentimiento, así se hará.

2

AUTORIZACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION PARA AUSENTARSE DEL PAIS

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — Solicito que se trate sobre tablas el mensaje del Poder Ejecutivo referido al permiso al señor presidente de la Nación para ausentarse del país, así como también el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales sobre el mismo asunto, reservado en Secretaría.

Sr. Presidente (Allende). — Si ningún señor senador hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador por Catamarca.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Allende). — Por Secretaría se va a dar lectura del dictamen de la comisión.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales ha considerado el permiso que solicita el excelentísimo señor presidente de la Nación para ausentarse del país; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja prestéis vuestra aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Concédese al excelentísimo señor presidente de la Nación el permiso que solicita para

ausentarse del país en el período comprendido hasta el 31 de diciembre del corriente año, inclusive, cuando razones de gobierno lo indiquen.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 16 de noviembre de 1973.

Alberto M. Fonrouge. — Vicente Leónides Saadi. — Francisco Eduardo Cerro. — Fernando de la Rúa. — Héctor Domingo Maya.

ANTECEDENTE

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación:

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el correspondiente permiso constitucional para ausentarme del país, en el período comprendido hasta el 31 de diciembre del corriente año, cuando razones de gobierno lo indiquen.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN DOMINGO PERÓN.

Sr. Presidente (Allende). — En consideración. Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Saadi. — Señor presidente: la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales aconseja se otorgue el permiso solicitado por el excelentísimo señor presidente de la Nación para ausentarse del territorio de la República, pues son de total conocimiento las motivaciones que determinan este viaje, las que tienen un estricto sentido gubernativo y de interés público. Esto, señor presidente, sin contar con las facultades que le otorga la Constitución Nacional en el inciso 21 del artículo 86, por el cual puede hacerlo libremente.

El viaje del jefe de Estado es de capital importancia en la época que estamos viviendo, para tomar contacto con otro jefe de Estado y con el pueblo de otro país. En este caso es de fundamental importancia, pues se trata de los hermanos uruguayos, que en la instauración del nuevo gobierno inician una política de acercamiento con todos los países del mundo.

Por estas breves razones, reitero lo expresado en el sentido de que se acuerde la licencia solicitada por el excelentísimo señor presidente de la Nación.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente, nuestro bloque va a votar afirmativamente el pedido de licencia que formula el señor presidente de la República.

Entendemos que es una buena práctica y que es plausible la actitud que adopta de requerir del Poder Legislativo la resolución correspondiente.

También nosotros le asignamos al viaje que va a realizar a la República Oriental del Uru-

Sr. Presidente (Allende). — Se procederá en consecuencia.

5

CONSTITUCION DE LA CAMARA EN COMISION

Sr. Presidente (Allende). — Corresponde considerar el tema que quedó pendiente: mensajes del Poder Ejecutivo relativos a la situación de la provincia de Formosa.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — En razón de que este asunto ha entrado en la sesión de esta mañana, la comisión respectiva no ha podido reunirse para producir despacho, pero las alteraciones del orden y la situación de inquietud que vive el pueblo de Formosa hacen indispensable que el Parlamento considere esta cuestión.

Voy a pedir que, de acuerdo con lo que establecen los artículos 123 y siguientes del reglamento, se constituya el cuerpo en comisión, a fin de considerar en esa forma la propuesta del Poder Ejecutivo para que estudiemos la situación de Formosa.

Anticipo que el señor senador Fonrouge ha elaborado un proyecto de ley con relación a este asunto, de manera que va involucrado en mi petición que la constitución de la Cámara en comisión se refiera a tratar el mensaje del Poder Ejecutivo y el proyecto del señor senador Fonrouge sobre tablas.

Sr. Díaz Biale. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Díaz Biale. — Pido que las autoridades de la mesa sean confirmadas.

Sr. Presidente (Allende). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador por Jujuy de que la Cámara se constituya en comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Allende). — La Cámara queda constituida en comisión. Se va a votar la moción del señor senador por la Capital para que queden confirmadas las autoridades de la mesa para presidir la conferencia.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Allende). — Quedan confirmadas las autoridades de la mesa para presidir la conferencia.

6

SITUACION INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE FORMOSA. — DISCUSION EN COMISION

Sr. Presidente (Allende). — Por Secretaría se dará lectura a los mensajes del Poder Ejecutivo

y al proyecto del señor senador Fonrouge relativos a la situación de Formosa.

—Se leen nuevamente los mensajes del Poder Ejecutivo que figuran en los puntos III y IV de los asuntos entrados.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase intervenida la provincia de Formosa a los fines de su normalización institucional y de la reorganización de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Art. 2º — Los gastos que ocasione el cumplimiento de esta ley se harán de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alberto M. Fonrouge.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Solicito que la constitución de la Cámara en comisión importe la previsión del artículo 126 del reglamento de que no se observe unidad de debate, y que cada orador pueda hablar indistintamente sobre los puntos que comprenda la cuestión a considerar.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Allende). — Habiendo asentimiento, se procederá en consecuencia.

Sr. Fonrouge. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Fonrouge. — Evidentemente, que estudiar en el Honorable Senado de la Nación la intervención a los poderes de uno de los Estados que integran la República, no sólo es un asunto espinoso sino que causa también angustia republicana. No debería ser nunca este Honorable Senado el llamado a elucidar la suerte institucional de una provincia argentina. Pero los acontecimientos históricos han obligado al Parlamento, en múltiples ocasiones, a afrontar problemas de esta naturaleza. Están llenos los Diarios de Sesiones de ambas Cámaras de testimonios en este sentido. Así, muchos legisladores, a través del tiempo, levantaron su voz en defensa de las instituciones o en procura de hallar un remedio institucional que zanjara dificultades insuperables en el orden local.

Yo intervengo en este asunto con profundo dolor. Represento a una provincia, como la de Buenos Aires, que ha mantenido en alto el estandarte de su autonomía, y que ha sido celosa cultora del principio, base de la organización nacional. Por eso hablo con pena republicana, y sé que lo hago ante legisladores que, representando cada uno a su propia provincia, también han de sentirse angustiados frente al hecho.

Es indudable que hay poderosas razones que explican el evento, como así mismo hechos real-

mente graves y trascendentes que determinan al Poder Ejecutivo —que ha izado la bandera del respeto por la Constitución— a consultar al Parlamento, teniendo en cuenta que en Formosa como en tantas otras provincias están gobernando hombres que integran su mismo partido.

Sólo poderosos y graves motivos, repito, han podido impulsar la comunicación del Poder Ejecutivo. Y en justa interpretación de ese mensaje corresponde que digamos, señores senadores, que no se trata de un proyecto de ley de intervención, sino de la denuncia que puntualiza las difíciles circunstancias que atraviesan en esa provincia las instituciones, y la incierta situación que ellas crean al pueblo de ese Estado. Respetuoso de la voluntad ciudadana, representada en el Parlamento, nos requiere para que nosotros decidamos sobre tan urticante cuestión.

Me voy a permitir, señor presidente y señores senadores, para que entremos en materia, leer algunos antecedentes que informarán al cuerpo más ampliamente y que contribuirán al juicio que habremos de emitir esta noche.

En el telegrama que firma el doctor Juan Fernández Bedoya, presidente del superior Tribunal de Justicia de Formosa, se transcribe el acta labrada por la Legislatura al promover el juicio político contra el gobernador. Se dice: «Formosa, 16 de noviembre de 1973. A su excelencia el señor gobernador de la provincia, don Antenor Gauna. Cumpló en dirigirme a su excelencia llevando a su conocimiento que esta Honorable Cámara, en sesión extraordinaria del día de la fecha, ha sancionado la resolución número 217, cuya copia se remite a sus efectos.

“Resolución número 217: Visto el despacho producido por la Comisión Especial designada por esta Honorable Cámara de Diputados para el estudio de pedido de juicio político formulado contra el señor gobernador de la provincia, don Antenor Argentino Gauna, y considerando: Que en los fundamentos del referido despacho provenientes de un exhaustivo examen de las causales denunciadas, de los elementos probatorios aportados y demás incidencias referenciales, se construye que la valoración formulada a priori de los cargos es de grave y peligrosa significación. Que las violaciones constitucionales, legales y administrativas, reiteradas en incontables instrumentos públicos emanados del poder administrador; que así mismo, actos de este mismo poder violan flagrantemente aun las normas de ordenamiento penal y que en el orden federal el estado de la administración es caótico y deviene en actos arbitrarios carentes de motivaciones y absolutamente no encuadrados aun en un orden elemental en los marcos de contención que fijan los preceptos jurídicos y constitucionales a que debe ajustarse un desarrollo de gobierno. Que, así mismo, tal estado de cosas, tal inoperancia, negligencia y desaprensión en el manejo de la cosa pública se refleja en un

estado de confusión e inseguridad colectiva, sin que los administrados puedan tener certidumbre alguna acerca de sus instituciones progresivamente deterioradas, comprometiéndose, así mismo, sin aplicación a fines de beneficio social y público, los fondos patrimonio del erario provincial. Y atento al hecho de que, sometido el referido despacho a la consideración de esta Honorable Legislatura, por manifestación elocuentemente expresa de los respectivos presidentes de bloque, que adhirieron a los términos del despacho producido por la Comisión Especial y que igualmente realizada la votación, la Honorable Legislatura resolvió por unanimidad de sus veintidós miembros presentes aprobar el despacho que determina como procedente el juicio político peticionado, la Honorable Cámara considera que implica riesgo para la ciudadanía y para la cosa pública permitir y convalidar la prosecución de una administración hasta tal punto desquiciada y ajena a derecho y que son imperativas las medidas inmediatas de contención en salvaguardia de los sagrados derechos que representamos, cuya fiel custodia se nos confiara y que hemos jurado defender.

“Por todo ello, la Legislatura de la provincia resuelve:

“Artículo 1º — Suspender en el desempeño de sus funciones al señor gobernador de la provincia, don Antenor Argentino Gauna, conforme lo establece el artículo 113 de la Constitución provincial.

“Art. 2º — Disponer en forma inmediata que por la Escribanía Mayor de Gobierno se proceda a poner en funciones de gobernador al señor vicegobernador don Ausberto Ortiz, en reemplazo del anterior, don Antenor Argentino Gauna, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública si lo considerare necesario.

“Art. 3º — Notificar por Presidencia y Secretaría de esta Honorable Cámara al acusado, señor don Antenor Argentino Gauna, de la presente resolución.

“Art. 4º — Comuníquese al Superior Tribunal de Justicia, juez federal, etcétera.”

Otras secuencias posteriores informan que, constituido el escribano mayor de gobierno para cumplimentar la disposición de la Honorable Legislatura, fue puesto preso dentro de la Casa de Gobierno y, por tanto, impedido de su gestión.

Por su parte, el gobernador de la provincia resistió la disposición de la Asamblea, desarticulando los mecanismos legítimos para resolver el problema.

Tengo que agregar, para cerrar este informe, que el presidente de la Honorable Legislatura que procedió a formalizar los requisitos del juicio político, es el presidente del Superior Tribunal de Justicia, porque la Constitución local señala que si el acusado es el gobernador, ése es el funcionario de ley para actuar en la circunstancia. Pero ese funcionario de la Justicia también está alcanzado por el planteo de incons-

titucionalidad que se ha deducido quedando sometido a otra situación de interés que la política lugareña ha puesto de manifiesto.

Así, señor presidente, ni el testimonio de la Legislatura ni la actitud y argumentos que formula el señor gobernador titular, ni tampoco la actuación del presidente del Poder Judicial de la provincia espejan una información fidedigna. Trasluce la misma elocuencia del acta reproducida la pasión sectorial en que se inspira. De tal suerte, el procedimiento constitucional local que se ha ensayado no fue el libre ni equilibrado juego de las instituciones en las que todos nosotros confiamos, y cabe la sospecha de que reposa sobre una colusión de conveniencias abroqueladas en cada una de esas ramas del poder, negativas y peligrosas, y suficientes para crear una situación caótica en la provincia.

La síntesis permite formular un juicio. Si bien es cierto que la Nación debe respetar la autonomía provincial, también tiene el Poder Ejecutivo nacional y tenemos nosotros —el Congreso— la obligación de velar por que las provincias vivan en paz y en tranquilidad y de socorrerlas urgentemente ante el desorden.

Situación tan irritante producida en Formosa ha generado una gran inquietud. Se han adocenado ciudadanos en sus calles, para tratar de cobrar ventajas en favor de las posiciones en que militan.

Así está gravemente comprometida la seguridad de la población y, por tanto, la tranquilidad de una provincia hermana nuestra, digna de mejor suerte.

Debemos sumar la circunstancia de que Formosa está en la frontera; frontera que ofrece cada día mayor singularidad, requiriendo la preocupación de los argentinos para vigilarla adecuada y prolijamente. Formosa se torna así una vidriera de la República a través de la cual nos miran desde el exterior.

Todo eso, señor presidente y señores senadores, hace pensar que la intervención federal es indispensable como medida drástica en defensa de la República, de la tranquilidad de Formosa y de la seguridad nacional, punto de vista, garantía y principio que están aconsejados en el caso por una preocupación firmemente ciudadana, que no admite que por el resquicio de una circunstancia casual y pequeña pueda comprometerse la organización institucional argentina.

Con estas pocas palabras, señor presidente —quiero insistir que están dichas con franco sentimiento—, dejo fundada también la decisión del Frente Justicialista que reacciona en amparo de las estructuras legales y legítimas de la Nación.

Para terminar, me basta decir que no es solamente una pena de carácter constitucional la que nos aflige, porque sentados en nuestro bloque tenemos hombres que representan a la provincia afectada, con quienes compartimos la zozobra

pero con quienes también estamos solidariamente decididos a solucionar este problema, defender la Constitución y elaborar el futuro del país.

Sr. Sapag. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Sapag. — Señor presidente: encaramos con pena pero con plena conciencia de la responsabilidad de estos momentos el problema que aqueja a la provincia de Formosa. Y es especialmente grave esta situación por cuanto estamos en este recinto precisamente en representación de nuestras provincias como expresión del régimen federal que consagra nuestra Constitución.

Creemos en el federalismo como historia y como filosofía: como historia, porque la República se conformó por el acuerdo de las provincias que la componen a costa de mucha sangre, sudor y lágrimas para dar lugar a una «patria grande»; como filosofía, porque creemos que el federalismo está directamente vinculado a la personalidad del hombre argentino y constituye el auténtico dique de contención contra la influencia del centralismo absorbente.

Por todo esto nos duele profundamente que se traten de encontrar los motivos para una posible intervención federal a la provincia de Formosa. Respetuosos de las autonomías provinciales, somos reacios a la utilización de este remedio de excepción.

Creemos en la necesidad de agotar todos los recursos legales que el pueblo de Formosa tiene en su Constitución para defender su autonomía. Por eso, señor presidente, somos contrarios a las medidas que de alguna manera implican una imposición a la voluntad de su pueblo vigoroso, luchador y sacrificado.

Creemos que los problemas de la provincia de Formosa, que no implican un desorden nacional ni afectan el estado de la comunidad argentina, deben ser solucionados por ella misma, por sus leyes, por sus poderes constituidos. El criterio que debe privar es el de que los conflictos internos son de competencia exclusiva de la autonomía provincial. Creemos que dentro de las instituciones provinciales se encuentran los recursos legales necesarios como para que esta lamentable situación pueda ser superada.

Señor presidente: solicito a todos los señores senadores que analicemos serenamente y estudiemos exhaustivamente el proceso con estricta justicia, a la luz de la verdad, del derecho de defensa de todas las partes agraviadas por los problemas creados en la provincia de Formosa. Así evitaremos equivocarnos con el apresuramiento, y que nunca pueda materializarse nada que atente contra la soberanía provincial, contra los principios de la democracia, contra el sistema republicano y representativo de gobierno, y únicamente cuando comprobemos que hay una subversión completa al régimen federal quedaremos autorizados para resolver la intervención.

Señor presidente: por las razones expuestas hago moción para que se constituya una comisión especial, compuesta por siete señores senadores, con la misión especial de constituirse de inmediato en la provincia de Formosa a los efectos de comprobar la situación real de los conflictos existentes entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y en el plazo de 72 horas informe a esta Honorable Cámara el resultado de su cometido. Autorizar, así mismo, a la Presidencia de este alto cuerpo para designar a los integrantes de la referida comisión senatorial.

Luego de escuchar atentamente al señor senador Fonrouge formulo este pedido, a fin de que las informaciones apasionadas que pueden traer distorsiones al seno de esta Cámara, y el deseo de obrar con rapidez, nos permitan, de todos modos, tomar el tiempo suficiente, que es corto, y adoptar una medida justa, una medida que no avasalle al pueblo de Formosa.

Nada más.

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Señor presidente, señores senadores: el Poder Ejecutivo ha remitido a esta Cámara un mensaje que se limita a la información sobre el conflicto de poderes existente entre el Ejecutivo y el Legislativo de Formosa.

La información es harto sintética y escasa para sacar conclusiones acerca de la posición a adoptar en esta emergencia.

El mensaje tampoco contiene sugerencia alguna que resulte complementaria de la información, limitándose a dejar librado al criterio de este cuerpo si el caso encuadra en los supuestos del artículo 6º de nuestra Carta Magna.

El Poder Ejecutivo de Formosa ha solicitado la intervención federal al Poder Legislativo de la misma, haciendo uso de la facultad que cualquiera de los tres poderes tiene para ese fin.

Pero el Poder Ejecutivo nacional, con buen criterio, no se ha apresurado a recoger ni a aceptar expresa o tácitamente esa petición, sino que ha derivado la responsabilidad de su consideración al Senado. Nos corresponde, entonces, evaluar profunda y concienzudamente todas y cada una de las circunstancias que han rodeado al hecho, recogiendo, antes de decidir, una información actual y más abundante que la suministrada hasta el momento.

Disponer la intervención federal a una provincia constituye un acto político, es decir un acto a cargo de los poderes políticos que lo están ejerciendo a mérito de una potestad constitucional. Tal acto no sería serio ni responsable si lo produjéramos sin la prolija evaluación que mencioné, y sus consecuencias podrían resultar trágicas para la República.

Mi provincia, San Juan, tiene una larga y penosa experiencia en esta materia. Creo no

equivocarme al afirmar que ostenta el récord de intervenciones y que aún no se repone de sus funestos resultados.

Es por eso, también, que como hombre del interior y ferviente defensor del federalismo, soy reacio a admitir la intromisión del poder central, salvo cuando se han agotado los medios para evitar la violación de la forma republicana de gobierno, y siempre que no quede nada al alcance de las instituciones legales para superar el hecho con sus propios recursos y lograr el normal funcionamiento de sus instituciones.

Nuestra historia está plagada de arbitrarios decretos de intervención federal en las provincias, arbitrarios a sabiendas en unos casos y por apresuramientos en otros. Abocarnos a resolver este caso solamente con la pobre información que tenemos importa apresuramiento, y ese apresuramiento puede engendrar la arbitrariedad.

No me asusta sostener la necesidad de una intervención si ella es realmente necesaria; pero me aterra el solo pensar en el avasallamiento de las autonomías provinciales en uso de facultades constitucionales ejercidas con ligereza y sin la debida maduración.

El Estado nacional cuenta con los medios de información suficientes para ilustrar con amplitud y de inmediato acerca de los caracteres, antecedentes y pormenores del conflicto. Esa ilustración debe ser canalizada a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que deberá arbitrar los medios para obtenerla con la urgencia que el caso indica y, una vez lograda, analizarla y relacionarla con disposiciones legales de la provincia afectada, ya que estimo muy necesario saber si allí se ha actuado conforme con su Constitución y demás normas que la complementan, y si pese a ello no se ha encontrado el remedio para evitar el encuadre del caso en el artículo 6º de la Constitución Nacional.

Es necesario señalar —y esto debemos proclamarlo para que lo sepan todos los argentinos— que el peor gobierno constitucional es preferible a la mejor de las intervenciones.

Por todo ello propongo adoptar un temperamento que nos lleve a la seguridad de que ha llegado la oportunidad de decretar esta intervención. Un temperamento puede ser el propuesto por el señor senador Sapag; otro podría ser invitar al señor ministro del Interior para un amplio y exhaustivo informe con el fin de resolver si realmente estamos ante la necesidad de decretar la intervención y, en este caso, con la expresa fijación de un plazo para que dentro de los noventa días se convoque a elecciones.

Nada más, señor presidente.

Sr. Pose. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Pose. — Señor presidente, señores senadores: se avasalla o se quiere avasallar la auto-

nomía o la soberanía de una provincia con la intervención a sus tres poderes. Como bien lo ha dicho el senador Fonrouge, da pena y tristeza realizar este acto, aunque también ha dicho que nos daba detalles de lo ocurrido en Formosa. Pero un examen de mi conciencia me indica, formalmente, que no puedo votar una intervención si no es a través de un examen exhaustivo y terminante de la verdadera situación de esta provincia.

Estaría dispuesto a votar la intervención, si señores, si un informe de mis pares me dijera que así debe ser. Pero de ninguna manera mi conciencia me puede autorizar a votar esta intervención que avasalla la soberanía de una provincia, nada más que en base a detalles que se traen al Senado. Por eso estoy plenamente convencido de que es necesario el informe de una comisión de senadores para que votemos con la plena convicción que debe ser dictada esta sanción de intervención.

Con estas palabras, señor presidente y señores senadores, fijo mi posición.

Nada más.

Sr. Fonrouge. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Fonrouge. — Si me permiten los señores senadores, quisiera informar a la Presidencia que aquí están los antecedentes remitidos por el Poder Ejecutivo, que informan detalladamente sobre la situación creada en la provincia de Formosa. Seguramente por ser tan copiosa dicha información la Secretaría no ha creído conveniente darle lectura. De todos modos, no sé si sería oportuno proceder a hacerla conocer para que sirva como elemento de juicio.

Sr. Pose. — Necesitamos conocerla; no podemos votar a ciegas.

Sr. Presidente (Allende). — Si el señor senador se refiere a los mensajes, tengo entendido que por Secretaría se ha proporcionado copia fotográfica de los mismos a los señores senadores.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente y señores senadores: no podemos dejar de expresar la preocupación y la sincera angustia que nos causa el hecho de que a tan poco tiempo de restablecidas las instituciones republicanas debamos afrontar la consideración de un proyecto de ley que dispone la intervención a una provincia argentina.

En atención a que esta Honorable Cámara está constituida en comisión, nuestro sector propone como despacho el texto al cual voy a dar lectura en este acto: «El Honorable Senado de la Nación, constituido en comisión, ha considerado los mensajes del Poder Ejecutivo nacional de fecha 15 y 16 de noviembre de 1973 relativos a la si-

tuación institucional en la provincia de Formosa, y ha resuelto aprobar la siguiente declaración:

»Artículo 1º — Declarar que, en virtud de los antecedentes recogidos, no se dan las circunstancias previstas en el artículo 6º de la Constitución Nacional para disponer la intervención federal a la provincia de Formosa, en la cual se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo el señor vicegobernador, en virtud de haber sido suspendido el señor gobernador con motivo de los trámites del juicio político previsto en el artículo 110 de la Constitución provincial.

»Art. 2º — Reafirmar la decidida vocación federalista de este cuerpo y expresar su deseo de que la Constitución y la ley sean lealmente acatadas por todos en la provincia de Formosa, preservándose su autonomía y el respeto debido a la decisión de la Legislatura.

»Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.»

Este es nuestro aporte y nuestra actitud, señor presidente, frente a un problema que a todos nos conmueve y nos preocupa. Creo que nadie ha de dejar de compartir la angustia republicana que expresara el señor miembro informante, aunque, desde luego, las soluciones que se auspician sean diversas.

Tampoco quiero dejar de señalar lo que considero una actitud positiva del Poder Ejecutivo, al haber remitido sus mensajes a este honorable cuerpo, derivando la consideración del asunto al Parlamento.

Nosotros pensamos que no todo conflicto en el orden provincial debe solucionarse por vía del remedio extremo de la intervención federal. Es preciso, previamente, agotar los trámites y recoger la información adecuada y suficiente.

Es indudable, señor presidente, que en la precipitación con que debemos abocarnos a esta cuestión falta la información que nos permita evaluar, en profundidad, si realmente existe o no un problema insuperable en la provincia de Formosa, que signifique la subversión de las instituciones republicanas. Es más, pienso que la presencia en esta provincia de la Comisión de Asuntos Constitucionales o de una comisión especial, como ha sugerido el señor senador por Neuquén, podría no sólo procurar la información que precisamos, sino también, muy posiblemente, lograr el avenimiento de las partes, de modo de conseguir que se resuelva, en el mismo plano institucional de la provincia, la situación por la que atraviesa.

Acá debemos plantearnos un interrogante previo, al cual difícilmente podamos dar respuesta total y acabada en este momento: ¿existe realmente un conflicto que justifique esta intervención?

Nosotros, con los elementos de que disponemos y lo que surge de los mensajes del Poder Ejecutivo, que es lo único que conocemos, consideramos, como lo decimos en nuestro proyecto,

que no se dan las circunstancias para acudir al remedio extremo de la intervención federal.

Nuestra preocupación es, ante todo, preservar las instituciones provinciales y pensamos que, según surge de esos mensajes, hasta el momento ellas han actuado y funcionado de acuerdo con los requisitos del artículo 59 de la Constitución Nacional. La Legislatura se ha pronunciado en forma unánime, disponiendo la suspensión de sus funciones del señor gobernador de la provincia, es decir, ha obrado constitucionalmente, de acuerdo con las propias normas provinciales.

El mensaje del Poder Ejecutivo nacional del 16 de noviembre contiene una ligera referencia al hecho de que no hubiese entrado aún en vigencia la ley reglamentaria del juicio político, en virtud de la cual habría obrado la Legislatura. Pero yo observo, señor presidente, que, conforme a los artículos 110 y siguientes de la Constitución provincial, la institución del juicio político no precisa de una ley reglamentaria, porque estas normas tienen operatividad directa, y se daría el absurdo de llegar a aceptar que por el acto omisivo y negativo de un gobernador que no promulga una ley reglamentaria, esta institución básica para el equilibrio de los poderes que son esenciales en el régimen republicano que debe imperar en las provincias, se vea frustrada.

El dato cierto es que el gobernador suspendido viene desconociendo la decisión adoptada por la Legislatura. Y ese gobernador, indudablemente, tiene a su favor la policía.

Pienso que aceptar que la simple negativa del gobernador enjuiciado y suspendido a acatar el fallo del órgano legislativo de la provincia, no puede significar un conflicto de poderes que se remedia a través de una intervención federal que arrasa con los tres poderes de la provincia.

¿Es exacto, como ha expresado el señor miembro informante, que está en riesgo la seguridad de la población de la provincia de Formosa? Tal circunstancia no surge del mensaje del Poder Ejecutivo, y nosotros no podemos computarla, en mi opinión, para justificar esta ley de intervención.

Pensamos que a través de una información directa, recogida en la misma provincia, podríamos arbitrar soluciones que con profundo sentido federalista permitiesen evitar esta dura instancia. Es posible que se encuentre una solución que remedie el caso, a través de una intervención limitada a resguardar la plena vigencia de la autoridad legítima, que es el vicegobernador, quien ha asumido en virtud de la suspensión al gobernador dispuesta por la Legislatura.

Por tales razones ponemos énfasis en considerar negativa la intervención a la Legislatura y al Poder Judicial, porque este criterio implica convalidar en los hechos una actitud, en todo caso indebida, de un gobernador que no acata la decisión del máximo órgano legislativo de la

provincia. Es preciso, señor presidente, cambiar el criterio de que ante cualquier conflicto sin significación trascendental y con remedio por otras vías se produzca una intervención federal que aniquile, sin más trámite, los poderes de las provincias. Sólo así afianzaremos el sentido federalista con que debe interpretarse el artículo 69 de la Constitución Nacional.

En virtud de las consideraciones expuestas, nuestro sector anticipa su voto contrario al proyecto de ley que se ha enunciado. Votaremos, en cambio, en favor del despacho que acabo de leer.

Deseo expresar, para finalizar, el anhelo de que encontremos la forma de evitar la utilización de esta medida extrema de la intervención federal con la amplitud con que surge del proyecto expuesto por el señor miembro informante. El federalismo argentino y la autonomía de las provincias que él implica constituyen un aspecto esencial de nuestros postulados, y por esos objetivos hemos mantenido una larga lucha. A través de una actitud constructiva, señor presidente, buscando agotar los lauces de la conciliación, quizás logremos preservarlo.

Sr. Díaz Biale. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Díaz Biale. — En primer término, señor presidente, quiero hacer referencia a la actitud del Poder Ejecutivo que ha llamado un tanto la atención del señor senador Bravo. El Poder Ejecutivo, al remitir la información al Congreso de la Nación, ha ajustado su proceder a la doctrina constitucional argentina y norteamericana y a los casos resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como, por ejemplo, los casos Cullen, Llerena y Orfila. Es decir que el Poder Ejecutivo nacional ha actuado como colegislador ante el Congreso, que tiene una facultad que le es privativa.

En segundo término, quiero expresar que es inadmisibles que se sostenga que el Poder Ejecutivo de la Nación, al remitir estos informes, pretenda el avasallamiento de las autonomías provinciales. Y digo que es inadmisibles, porque el Poder Ejecutivo de la Nación ha demostrado en todos y en cada uno de sus actos un acatamiento total a la Constitución de la Nación.

Por otra parte, debo observar que el hecho de que sean sintéticas las informaciones no implica el juicio de falta de seriedad a que se ha referido el señor senador Bravo.

Aquí existe un hecho objetivo y concreto que no ha sido puesto en discusión. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de Formosa se atribuyen la legitimidad del poder y la potestad jurisdiccional.

Conforme a la Constitución de Formosa ha intervenido también el presidente del Tribunal Superior, según un documento que ha leído el señor senador Fonrouge. En estas condiciones,

estamos en presencia de un conflicto de poderes que no puede resolverse en jurisdicción provincial. En consecuencia se ha subvertido la forma republicana de gobierno y se justifica que el poder central ejercite la facultad que le confiere el artículo 69 de la Constitución Nacional, ya que no están dadas las condiciones establecidas en el artículo 59, porque la provincia no goza del libre ejercicio de sus instituciones.

Sr. de la Rúa. — ¿Me permite una interrupción, señor senador, con la venia de la Presidencia?

Quería preguntar, dentro de ese orden de ideas, qué razón hay para extender la intervención al Poder Judicial.

Sr. Díaz Biale. — Porque el Poder Judicial interviene en el conflicto; se hace parte porque el presidente del Superior Tribunal de Justicia ha tomado participación conforme a la nota que ha leído el señor senador Fonrouge.

Sr. de la Rúa. — Pero es el presidente nato, de acuerdo con la Constitución.

Sr. Díaz Biale. — Ya es parte en el proceso.

Sr. de la Rúa. — Considero grave la intervención al Poder Judicial sin una previa evaluación de si ésta puede justificarse.

Sr. Díaz Biale. — La intervención al Poder Judicial corresponde porque ya intervino el presidente del Tribunal de Justicia. Y quiero agregar que no compete a este Honorable Senado entrar a juzgar cuál de los dos poderes tiene la razón, sino que la intervención federal se justifica por la verificación objetiva del hecho de la alteración del régimen republicano.

Además de esto, que sería un planteo puramente teórico, el señor senador Fonrouge ha hecho referencia en su informe a una situación de peligro en donde están en juego la seguridad y la vida de los ciudadanos de Formosa.

En estas condiciones, estimo plenamente justificada la intervención federal a la provincia de Formosa por las razones que he aducido.

Sr. Frugoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Frugoli. — Señor presidente: el señor senador Fonrouge, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales, al hacer referencia a los hechos que a su criterio justificarían esta medida de excepción, ha dicho, entre otras cosas, si no he tomado nota equivocadamente, que estamos frente a una administración desquiciada y ajena a derecho, que el señor gobernador de la provincia no acata las consecuencias del juicio político promovido, que el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia está vinculado a intereses lugareños, que hay una corrupción de intereses abroquelados en cada uno de los poderes y que, finalmente, se torna Formosa espejo de una de las vidrieras de la República porque está ubicada en una zona fronteriza.

Entiendo que ninguno de estos hechos, ni tampoco los que se mencionan en los mensajes del Poder Ejecutivo nacional, nos coloca frente a una violación de la forma republicana de gobierno.

El señor senador por la Capital, por su parte, ha afirmado que existe un hecho objetivo y concreto, no puesto en discusión, que sería que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se atribuyen la legitimidad del poder y la potestad jurisdiccional. Me parece lo más lógico que cada uno se atribuya la legitimidad del poder y también que se atribuya la correspondiente potestad jurisdiccional.

Sr. Díaz Biale. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Frugoli. — Sí, señor senador.

Sr. Díaz Biale. — Es lógico que cada poder se atribuya la potestad jurisdiccional y la legitimidad del poder en la esfera que le es propia, pero no excediéndose de ella. Y lo que aquí se discute es si existe o no un conflicto, por el hecho de que uno de los poderes se excede de su esfera al destituir al gobernador, y éste desconoce la legitimidad de la decisión de la Legislatura. Eso es distinto a lo que usted sostenía como dicho por mí.

Sr. Frugoli. — En ese caso no se estaría, entonces, en un problema de potestad jurisdiccional sino que se estaría en el problema de acatar o no las respectivas posibilidades jurisdiccionales de cada uno de los poderes.

Pero continúo con mi razonamiento. En consecuencia, afirma el señor senador por la Capital que estamos frente a un conflicto de poderes que no puede resolverse dentro de la jurisdicción provincial.

Con todo respeto, le digo al señor senador que ese argumento extrae su fuerza de la propia afirmación, y cae en una petición de principio porque se da por demostrado, precisamente, lo que se quiere demostrar.

Sr. Díaz Biale. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Frugoli. — Yo le permito, señor senador, pero ocurre que si usted me interrumpe tan seguido no puedo desarrollar mi pensamiento.

Sr. Díaz Biale. — Muy bien; le contestaré después.

Sr. Frugoli. — Ocurre, pues, que acá se dice, por un lado, que se da una situación que en los hechos es normal y, por otro lado, de esa situación normal se extrae como consecuencia que existe un conflicto de poderes que no puede ser resuelto en la órbita provincial.

Confieso que no advierto que la conclusión se ajuste a un riguroso orden lógico. Creo que en este momento en Formosa están jugando normalmente las instituciones. Si el señor gobernador de la provincia hubiera acatado el juicio político, estaríamos frente a una situación resuelta. Pero también las instituciones deben funcionar cuando hay situaciones de controver-

sia; si no, ¿qué sentido tendría la existencia de las propias instituciones provinciales? Por otro lado, ¿para qué están esas instituciones provinciales si cuando empiezan a funcionar nosotros decimos que no pueden dar soluciones al conflicto y recurrimos a la intervención federal?

Creo que de ninguna manera estamos frente a la situación que se enuncia. Muy por el contrario, estamos viendo cómo funciona la Constitución de la provincia de Formosa y eso no debe alarmarnos. Por el contrario, debe satisfacernos que los señores legisladores hayan recurrido al mecanismo institucional correspondiente para juzgar la conducta de un gobernador que está cuestionado.

Por otra parte, se ha dicho que el Poder Judicial se interviene en razón de que el señor presidente del Superior Tribunal es parte en el proceso. También es lógico que sea parte en el proceso, porque lo establece la propia Constitución de la provincia. Así mismo, no justifica de ninguna manera la intervención del Poder Judicial la presunta mala colocación del presidente del Superior Tribunal, porque éste es un integrante más de dicho poder, que cumple una función determinada pero que tiene la misma exacta jerarquía desde el punto de vista jurisdiccional, que el más modesto juez de la provincia.

De modo que no creo que se pueda hablar de verificar objetivamente tal alteración del sistema republicano como ha señalado el señor senador por la Capital. Y tampoco se dan los otros supuestos que podrían justificar la intervención como sería, por ejemplo, que se desconocieran las leyes o la Constitución Nacional, o se impidiera el juego del sistema representativo; que el Poder Ejecutivo impidiera el funcionamiento del Legislativo o que hubiera acefalía de uno o de los tres poderes. Pero nada de eso está ocurriendo en este momento en Formosa. Que llegue a ocurrir en el futuro, es cuestión que nosotros no podemos afirmar en este momento. De modo que no puedo votar favorablemente este proyecto de ley, porque creo que no corresponde de ninguna manera hacerlo. Y es más; lamento que cuando empiezan a funcionar realmente las instituciones en la provincia, se intervenga para impedir su funcionamiento.

Creo que las argumentaciones que se han dado no sirven para justificar una medida que significa sin más allanar la autonomía provincial y que, además, afecta el principio de la soberanía popular, al substituirse uno de los poderes legítimamente elegidos por el pueblo. Esto, señores senadores, es muy grave, y de ninguna manera podría, con mi voto, avalar un proyecto de esta naturaleza.

Sr. Fonrouge. — Como he sido aludido, señor presidente, le recuerdo al distinguido señor senador por Mendoza, doctor Frugoli, que hace poco tiempo tuvimos que polemizar también, con motivo de un pedido que trajo el señor senador,

que podía ocasionar la intervención de su propia provincia, en razón de que se habían publicado o se publicarían en el Boletín Oficial de la provincia los gastos de propaganda que el gobierno había realizado. Si solo eso inquietaba al señor senador, creo que las razones que se han dado aquí...

Sr. Frugoli. — Sus interrupciones sin solicitarlas me van a obligar a que nunca le conceda una.

Sr. Fonrouge. — No lo haga entonces nunca, si es que le duelen estas cosas...

Sr. Frugoli. — Señor senador, la alusión a la intervención es de su cosecha. Lo único que hice fue traer el problema, plantearlo y pedirle al Poder Ejecutivo que informara si conocía la existencia de un decreto que implicaba enfrentar un comunicado del Ministerio del Interior con respecto a la prescindencia política de los gobernadores. Lo de la intervención —repito— es de su cosecha; yo no lo mencioné jamás.

Sr. Fonrouge. — ¿Qué voy a cosechar, señor senador?

Sr. Díaz Biale. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Díaz Biale. — El señor senador por Mendoza interpreta que el Poder Judicial de la provincia no está comprometido en el proceso. Y el Poder Judicial de la provincia está doblemente comprometido. Primero, por el hecho de que el presidente del Superior Tribunal ha acordado la decisión de la Legislatura; y segundo, porque el telegrama que leyó el señor senador Fonrouge da cuenta de la situación y dice: «Que las violaciones constitucionales legales y administrativas, reiteradas en incontables instrumentos públicos emanados del poder administrador, que, así mismo, actos de este mismo poder violan flagrantemente aun las normas de ordenamiento penal, y que en el orden federal el estado de la administración es caótico y deviene en actos arbitrarios carentes de motivaciones y absolutamente encuadrados aun en un orden elemental en los marcos de contención que fijan los preceptos jurídicos y constitucionales...».

O sea que no sólo interviene en el proceso, sino que abre un grave juicio sobre las actitudes del Poder Ejecutivo. Esto pone de manifiesto que así, objetivamente considerada, en la provincia de Formosa existe una situación grave y que afecta a los tres poderes, lo cual justifica la intervención federal.

Ahora, en cuanto a que es lamentable que estos hechos ocurran, así lo expresó el señor senador Fonrouge en su informe, y yo solamente debo decir que éstas son las lamentables consecuencias de la privación de los derechos civiles durante largos años de dictadura militar, o de presiones de la dictadura militar que sufrió el pueblo argentino.

Nada más.

Sr. Frugoli. — Si me permite, quiero decir que aquí la resolución de la Legislatura es lógica. Si ella ha sido dictada dentro de normas que establecen un procedimiento, la Legislatura no podía hacer otra cosa.

En cuanto a formular juicios, en el peor de los casos los hace una persona responsable de esos juicios y no un poder. Una cosa es el Poder Judicial y otra es el presidente del Superior Tribunal. A mí nunca se me ha ocurrido pensar que porque un día el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza se disloque mentalmente, se deba considerar demente a todo el Poder Judicial.

Sr. Fonrouge. — El presidente del Superior Tribunal da cuenta de un estado.

Sr. Frugoli. — Yo creo que aquí lo que está pasando es que se quiere prohibir el uso de automóviles porque se producen choques, y me parece que es una medida extrema.

Sr. Fonrouge. — Perdón: el texto que ha leído el señor senador por la Capital, es del Acta de la Honorable Legislatura.

Sr. Frugoli. — De acuerdo. Dígaselo a él; no me lo diga a mí. Yo estoy de acuerdo con usted, señor senador Fonrouge; pero éste es un argumento contra él y no contra mí. ¡Pónganse de acuerdo los señores senadores!

Sr. Fonrouge. — No: póngase usted de acuerdo.

Sr. Presidente (Allende). — Ruego a los señores senadores que no dialoguen.

Sr. Cáceres. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Cáceres. — Yo creo, señor presidente, que el diálogo es magnífico, y más en esta circunstancia, porque a través de él pueden sacarse conclusiones felices.

Esta tarde, al tener conocimiento de la posibilidad de intervención a mi provincia, tuve la tristeza de pensar en lo que podría decirse o hacerse aquí. Pero ahora puedo decir con satisfacción y con orgullo de argentino y de parlamentario que esa tristeza se transformó en alegría, porque escuché a quienes representan a las provincias cordilleranas —Frugoli y Bravo—, o a la Capital —de la Rúa— o a las provincias del Sur —Sapag y Pose— coincidir con los senadores por Formosa en el sentido de que estamos ante un hecho inusual por las circunstancias que se dan, aunque sean constitucionales y reglamentarias.

Pienso, señor presidente, en todo esto que vivimos en tan poco tiempo, de nuestra alegría al ver cómo todos habíamos coincidido en la necesidad de la institucionalización del país. Vimos cómo una decisión mayoritaria argentina decía que sí a un gobierno al que todos, de una u otra manera —políticos, empresarios, trabajadores— avalábamos y le dábamos nuestra palabra de apoyo. Pero ante los hechos que se sucedieron de nada valieron ese estado de esperanza y ese deseo de recuperación del país, de

la plena vigencia de sus instituciones republicanas, del imperio del orden, de la libertad y de la justicia en el marco de la democracia. Todo quedó marginado, todo cedió.

Además de todas esas circunstancias, yo recuerdo en este momento las palabras del conductor de mi partido, doctor Balbín, cuando en una rueda de amigos nos dijo: «No vamos al 23 de septiembre para triunfar: el pueblo ya decidió; ni vamos tampoco para sumar los votos de los descontentos, que hay muchos; vamos para el triunfo del gobierno que va a ser el éxito del país, que nosotros necesitamos».

Ahora nos encontramos con otra piedra más que se pone en este camino de la institucionalización, que golpea nuestra alegría de vivir esta etapa de recuperación argentina y nuestro deseo permanente de colaborar. Al Poder Ejecutivo y a los señores legisladores representantes del oficialismo les consta.

Desde el punto de vista jurídico, personas mucho más competentes que yo han señalado la improcedencia de esta medida, pero, por encima de ello, me permito señalar un hecho cierto que los legisladores no podemos olvidar y es lo que significan las intervenciones.

Cada uno de los senadores que hoy ocupan estas bancas lo sabe perfectamente, porque lo vivió en su provincia. Repito con otras palabras lo que hace poco se ha dicho: el peor gobierno de provincia es mejor que el más brillante de una intervención. Coincido con el señor senador que ha manifestado esto.

Muchas veces dije que mi provincia, provincia nueva, ubicada allí arriba en el mapa de la República, parece una banderita, con el río Paraguay como mástil y como si las aguas del Pilcomayo y del Bermejo formaran sus ondas. Durante muchísimos años mi provincia estuvo alejada de la mirada de la República, como si el país terminara en el Bermejo, que nos separa del Chaco. Yo creo, señor presidente, que no puede ser que una provincia que a través de sus hijos ha hecho permanentemente el esfuerzo para salir de ese estado de postración, a causa de las intervenciones digitadas que el gobierno federal le hizo vivir durante 94 años de su vida, no supere esta situación. Yo, comparando los apenas nueve años de gobierno provincial con los ochenta y cinco años de gobiernos digitados, encuentro que los hemos superado en cualquier aspecto, ya sea socioeconómico, cultural o institucional.

Hoy llegaron legisladores de mi provincia y conversábamos de nuestra preocupación cuando empezábamos a constituir el primer gobierno y a crear las condiciones para el despegue, y ello no en la espera de acercarnos a las otras provincias, a las grandes que están representadas aquí por algunos señores senadores, sino para poder también tomar parte en la mesa del país. Y comentábamos que al cabo de nueve años la provincia hizo tres mil kilómetros de caminos,

contra mil doscientos que en ochenta y cinco años hizo la Nación. En 1960 nosotros creamos el Banco de la Provincia con diez millones de pesos, y hoy esa institución tiene una cartera crediticia de casi cinco mil millones de pesos, que fue hecha por los formoseños y no por los gobiernos digitados desde aquí.

Hace pocos días, hallándome yo en Formosa, hablaba de la posibilidad —en verdad hablaba de la seguridad— de que este Senado de la Nación prestara su apoyo para la constitución de una comisión parlamentaria encargada de estudiar los problemas del Noroeste mesopotámico. Decía que Formosa entra también en la Argentina potencia con obras de infraestructura. Así como Entre Ríos tiene Brazo Largo, Santa Fe el túnel subfluvial, y Corrientes y el Chaco ese puente maravilloso, tal vez tengamos nosotros una fábrica, o dos, o una escuela técnica media para poder dar mano de obra y posibilidades de estudio a todos esos formoseños que actualmente tienen que emigrar.

Yo pienso que no podemos dejar trunca esta realidad de Formosa, provincia en desarrollo. Van a quedar dormidas muchas leyes en la Legislatura de mi provincia. Recuerdo una en especial porque soy del campo y me interesó. Se presentó, en este periodo de gobierno peronista de Formosa, un proyecto para expropiar cuatrocientas mil hectáreas que pertenecen a sociedades anónimas. La expropiación se haría de acuerdo con lo que prescribe la Constitución de mi provincia y para entregar las tierras en propiedad a los auténticos productores, a los campesinos. Se trata de cuatrocientas mil hectáreas que se sacarían de las manos de unos pocos —cinco o seis propietarios— para entregarlas al esfuerzo, a la voluntad y a la decisión de muchos argentinos que con su trabajo y su sacrificio están esperando que se les abra el camino de la esperanza. Todo eso y muchas otras cosas van a quedar truncas.

Como formoseño podría yo decir del temor que en este momento están sintiendo en mi provincia cada hombre, cada mujer y cada niño. Y ello no porque creamos que podemos ser los mejores, pero sí porque estamos convencidos de que somos los que tenemos en la conducción de nuestras cosas el amor, el cariño, el deseo: que para mí es el marco que debe encuadrar al buen gobernante.

Hay muchas cosas que decir con respecto a este problema. Sin ánimo de polemizar, quiero abrir el diálogo y contestarles a esos dos brillantes señores senadores del oficialismo que hoy, quizás por falta de argumentos, parece que entraron en eclipse, lo digo con todo respeto. Quiero contestarles sobre algunos aspectos que considero erróneos, quizás por falta de información.

En primer lugar —es necesario aclararlo, sea cual fuere el resultado de este debate—, es indispensable señalar que la Justicia no tiene nada que ver en este problema. Yo escuché que

en dos oportunidades se mencionó su responsabilidad. La Justicia interviene por disposición constitucional, obligatoriamente, y nada más.

Me permito expresar que tal vez la conclusión de los señores senadores del oficialismo obedece a la lectura del texto del mensaje del Poder Ejecutivo nacional número 290, que en el punto 9º dice: «Con fecha 9 de noviembre pasado, el gobernador de la provincia anticipa al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, que se interpondrá recurso de inconstitucionalidad preventiva contra la Ley del juicio político, por ante el superior Tribunal de Justicia de la provincia, el que quedará de este modo involucrado en el conflicto de poderes».

El señor relator, informado de estos hechos, emite una opinión. Considero que si nos basamos en el texto del mensaje, desde luego la opinión vale. Si se trata de un poder y ha habido un reclamo por inconstitucionalidad...

Sr. Fonrouge. — Si me permite el señor senador, quiero expresar que es razonable que considere inválida nuestra opinión. Pero le retribuimos la misma cortesía: nosotros creemos que el señor senador no tiene razón.

Sr. Díaz Biale. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Cáceres. — Sí, señor senador.

Sr. Díaz Biale. — El señor senador formula un juicio despectivo que se lo agradecemos. Pero disintimos cuando señala que la aplicación del artículo 6º de la Constitución Nacional importa poner piedras en el camino, y no podemos estar de acuerdo con su tesis. La aplicación del artículo 6º de la Constitución Nacional significa nada menos que restablecer el sistema republicano que la misma Carta Magna establece. Por otra parte, una intervención no supone arrasar la autonomía federal en forma definitiva. Es un remedio hasta que las condiciones permitan el restablecimiento de las instituciones y, por consiguiente, de la autonomía.

De manera que quiero puntualizar nuestra posición en este aspecto. Para terminar, y con el objeto de que no quede sombra o duda en lo que respecta a la nota con relación a la cual el señor senador Frugoli solicitó nos pusieramos de acuerdo, aclaro, como lo expresó también el señor senador Fonrouge, que en el contenido de la nota se transcribe lo expresado por la Legislatura, pero está suscrita por el presidente del Tribunal superior. De manera que él hace suyo el juicio de la Cámara de Diputados.

Nada más.

Sr. Cáceres. — Continúo, señor presidente. Luego de las expresiones de los señores senadores del oficialismo a quienes reitero, está de más decirlo, mi respeto y mi simpatía. A través de mis palabras, a pesar de lo que se pueda deducir, de ninguna manera debe entenderse expresado el ánimo de ofender. Acepto lo que significa que mis razones o mis argumentos no los van a con-

vencer, y me permito decir que, por ahora, a mí tampoco, los de los señores senadores por lo menos porque veo que no están entrando en el tema, como en el caso del señor senador preopinante que en vez de referirse a lo que yo expresamente señalaba, lo hizo con respeto al artículo 69. Digamos que estuvo feliz, que me parece muy bien.

Pienso que es terminante, que debe ser terminante la opinión —y respecto a esto apelo a la comprensión de todos los señores senadores— que nos debe merecer la participación de la Justicia.

Además existen algunas manifestaciones que no se ajustan a la información que yo tengo, como que en mi provincia está en juego la vida de sus habitantes. Yo tengo la información de que reina absoluta tranquilidad, de que existe una aceptación tácita y gustosa, inclusive, del proceso constitucional que se está viviendo y que tan solo una resistencia de la autoridad gubernativa suspendida puede ser la única alternativa que marginaría la reglamentación, las leyes y la Constitución.

Para terminar, utilizo también las palabras del señor miembro informante cuando señalaba que Formosa, como vidriera al exterior, debía mostrar condiciones de seguridad y tranquilidad. Y pienso que justamente por estar cerca de dos naciones hermanas y por ser punto de convergencia en el tránsito a muchas otras, debe seguir participando con plena vigencia de sus instituciones dentro de este proceso nacional y, más aún, como homenaje de esta imagen de jerarquía institucional que está dando el país desde hace poco tiempo al resto del mundo, por esta apertura al exterior, a los viajes que nuestro presidente va a realizar con el fin de afirmar y consolidar a esta nueva Argentina institucionalizada. Como homenaje a todo esto doy mi punto de vista en favor de Formosa, de sus habitantes y del país. (*¡Muy bien!*)

Sr. Grubisich. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Grubisich. — A esta altura del debate es evidente que están definidas algunas de las dudas que trajimos al entrar al mismo. Pensábamos en principio que si el propio Poder Ejecutivo, con todas las posibilidades de que dispone en torno a los resortes de información que maneja, no propiciaba a través de sus mensajes la intervención a la provincia de Mendoza... Perdon, me ha traicionado el subconsciente. (*Risas*)

Sr. Fonrouge. — Es una cuestión de límites.

Sr. Martiarena. — Es un acto fallido.

Sr. Grubisich. — ... a la provincia de Formosa, tampoco dentro de las limitaciones con que cuenta el Poder Legislativo y este Senado, íbamos a encontrar las argumentaciones y la información de fondo que nos permitiera votar en un sentido o en otro, con la absoluta convicción de que estábamos procediendo conforme a elementos de

juicio fehacientes y que nos ponían en el camino de adoptar un criterio basado en el buen juicio y el raciocinio.

Pienso que antes de adoptar esta medida, el Poder Ejecutivo tiene algunos resortes políticos que puede utilizar, inclusive aquellos que hacen al auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden, a fin de que en alguna provincia circunstancialmente conflictuada —como puede ser en este caso la de Formosa—, a jugar los aspectos constitucionales que garantizan, precisamente, el orden republicano y la tranquilidad pública.

Si en el conflicto suscitado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en torno a cuestiones que nacen, más bien, de desencuentros políticos anteriores, que en los propios que podrían surgir por la sanción de la ley que reglamenta el juicio político —su posterior veto por el Poder Ejecutivo y la nueva insistencia de la Legislatura—, el Ministerio del Interior, con su poder político, hubiera tratado de allanar esas diferencias y, de alguna manera, le resultara imposible avenir a las partes o mantener el orden, dentro del poder que hubiera respetado la ley, quizás hubiéramos llegado a esa conclusión definitiva de que no quedaba otro remedio que la intervención federal.

Pero es del caso, señor presidente, que la información que remite el Poder Ejecutivo no difiere en gran medida de la periodística, que hemos recogido a través de la iniciación del proceso. No hay mayores argumentaciones que las conocidas por la opinión pública, y ellas son, a mi juicio, insuficientes para que nosotros, como senadores de la Nación, nos pronunciemos a favor de la intervención.

Yo encuentro sumamente válido el razonamiento —más que jurídico, lógico— que ha expresado el señor senador Frugoli. Si en momentos en que entran a jugar los resortes constitucionales de la provincia de Formosa se impide que ellos sigan el cauce normal previsto por las leyes, es evidente que el gobierno nacional es parte para agravar el conflicto, porque ni siquiera este proyecto de ley está fijando un término por el cual la provincia va a ser intervenida.

Además, en principio, también consideramos que la facultad de intervención que tiene el gobierno federal sobre las provincias debe manejarse con un criterio restrictivo. Esa es la excepción, para cuando ya se han agotado todas las otras instancias. Inclusive necesitaríamos esta noche aquí la presencia del señor ministro del Interior, para saber fehacientemente si se han agotado esas instancias.

Como hombres del interior, nos duele esta grave medida que se propicia. Y en mi caso particular, que vengo de una provincia con una breve historia constitucional, en la que nunca ningún gobernador pudo terminar un período constitucional, porque siempre el poder central la intervino por una u otra causa, es lógico

que tenga una prevención natural también contra este tipo de medidas, cuando no existe el convencimiento de que el análisis se haya profundizado en forma tal que la intervención sea una consecuencia inevitable de los hechos que estamos analizando.

A través de este debate, en que me he ilustrado algo más sobre lo que está ocurriendo y cuáles pueden ser las razones para intervenir a Formosa, es evidente que el criterio de la mayoría ha sido derrotado en las argumentaciones. No sé si eso se puede repetir en el número de los votos, porque la mayoría puede imponer su criterio a través de la mecánica numérica que se aplica en el sistema parlamentario y a cuyo respecto no existe otra alternativa. Pero, en la argumentación, hoy la mayoría ha sido derrotada antes de que se vote. Y yo me quedo con esta derrota —triste derrota— del federalismo, que podemos sufrir esta noche en los números, pero me quedo también con la gloria de la victoria, que íntimamente llevo, de que he defendido la más correcta posición federalista que se puede sostener en este recinto. Nada más.

Sr. Díaz Bialek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Díaz Bialek. — El señor senador hace referencia a su origen provinciano. Debo expresarle que yo también lo soy, ya que he nacido en una de las provincias más antiguas y altivas del país, como es Córdoba, aunque por el voto popular represento a la Capital Federal.

En cuanto a que se siente feliz con su triunfo, no puedo menos que felicitarlo, porque su victoria se basa simplemente en la supervalorización que hace el señor senador de su propia opinión, porque no tiene por qué dudar de que el Poder Ejecutivo nacional rinde, en primer lugar, una actitud de homenaje y respeto a la representación popular al informar sobre estos hechos al Congreso, sometiéndolos a su decisión. Y en segundo lugar, tampoco tiene por qué poner en duda que el Poder Ejecutivo nacional, al intervenir al Poder Judicial, obrará con la prudencia que lo está haciendo hasta ahora, por cuanto tiene la enorme responsabilidad de ser representante de la mayoría popular incuestionable del país.

Sr. Grubisich. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Grubisich. — Quiero señalar al señor senador que no le he formulado ningún cargo porque él no sea representante de una provincia tan prestigiosa y consubstanciada con el federalismo, como es Córdoba. En ningún momento me he referido a eso.

En segundo lugar, el Poder Ejecutivo cuenta, en razón de su función, con mayor información y acopio de datos que los que podemos tener nosotros, ya que en este aspecto el Poder Legislativo resulta débil ante el Ejecutivo. Por otra

parte, el propio Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de propiciar la intervención, si cree que ha llegado el caso. Entonces, ¿por qué vamos a optar nosotros por la variante de la intervención si el poder que cuenta con mayor información no lo hace?

Sr. Díaz Bialek. — Ese es un criterio personal sobre el valor de la información que ha leído el señor senador Fonrouge.

Sr. Grubisich. — Exactamente. A mí me parece escasa como para dar mi voto favorable al proyecto.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente, señores señadores: entiendo que este debate pone en tela de juicio un principio sobre el cual existe en esta Cámara, en mi modesta opinión, coincidencia unánime. Me estoy refiriendo a la defensa de las autonomías provinciales y al afianzamiento del federalismo.

Desde que se ha constituido este cuerpo, todos los señores senadores de las distintas provincias han demostrado ese fervoroso sentimiento. No dudo, en consecuencia, del espíritu que anima tanto a quienes sostienen el despacho que dispone la intervención a la prestigiosa provincia de Formosa, como a los que no lo han apoyado.

También creo —y esto quiero decirlo muy personalmente— que no hay en el Poder Ejecutivo un propósito manifiesto de avasallamiento a la provincia, o a la autonomía provincial de Formosa.

Lo que sí creo es que hay un grave error en la solución que se va a dar con respecto a Formosa.

Evidentemente, lo ha dicho muy bien el señor senador Grubisich en sus conceptuosas palabras, no existen elementos de juicio valederos, a través de este debate y de estos laconicos informes del Poder Ejecutivo, que puedan inducir en plena conciencia a tomar una decisión de esta naturaleza.

No puede dejarse de lado un hecho trascendente. Después de siete años de interdicción del sistema institucional argentino y del imperio de la soberanía popular, duele y dolerá a todo aquel que adopte una medida de esta índole, que despoja a una provincia —en este caso, Formosa— del derecho a regir su destino y gobernar autónomamente su régimen estatal.

Pero la verdad, señor presidente, es que acá existe una cuestión previa. Me adhiero totalmente a la proposición formulada por el señor senador Sapag. Hay una instancia previa que es la de agotar todos los caminos para lograr la solución que se requiere, manteniendo la autonomía de esa provincia, y donde el curso normal que se ha seguido en el proceso es el cauce jurídico, del derecho, y del régimen institucional de Formosa, por un pronunciamiento soberano y unánime de la Legislatura de esa provincia.

Si se hiciera un trámite de tipo previo, como lo ha señalado el señor senador Sapag, la Cámara lograría dos objetivos: en primer término, enviar la Comisión de Asuntos Constitucionales o una comisión especial que, en el mismo terreno, no a centenares de kilómetros, interprete, apunte y vea la realidad de la situación que vive esa provincia. Y, en segundo lugar, el beneficio de lograr que esta Cámara disponga de antecedentes valaderos y decisivos.

A pesar de los valiosos esfuerzos que han realizado los señores senadores Fonrouge y Díaz Bialeto, no consiguen demostrar —lo digo respetuosamente— la validez y procedencia de una intervención total a esa provincia.

En el peor de los casos, señor presidente, de los elementos aportados y escogidos surge que si aquí algo hay que intervenir es al Poder Ejecutivo de la provincia de Formosa, y de ninguna manera al Poder Legislativo, que cumplió con la ley, siguió el trámite del juicio político, hizo subscribir el acta al presidente del Superior Tribunal, porque lo manda la Constitución, y celebró la escritura pública por el escribano mayor de gobierno.

Es decir que se han cumplido todos los recaudos debidos.

Pero aquí, señor presidente, va a resultar que se «fabrica» un conflicto. Y acá viene también mi honda preocupación.

Esto es doloroso, ha dicho el señor senador Fonrouge. Sostengo que es peligroso, y sienta un precedente sumamente peligroso. Observen, señor presidente y señores senadores, que en forma unánime la Legislatura provincial sigue el curso del juicio político, pone en funcionamiento los mecanismos naturales y tiene la verdad constitucional en sus manos, pero resulta que debe inmolarse ese poder porque quien aparece culpable del enjuiciamiento es el que «provoca el conflicto», pero no porque exista verdaderamente conflicto, sino debido a que se resiste a cumplir con el trámite constitucional.

Por ello creo que si se hiciera un trámite previo, del tipo previsto y propuesto por el señor senador Sapag, daríamos la prueba de nuestra grande y fecunda paciencia en salvaguardia de una autonomía provincial que está en juego.

Observen los señores senadores que no estamos defendiendo a un gobierno de provincia que responda al pensamiento de los hombres de esta bancada.

Sr. Martiarena. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Perette. — Sí, señor senador.

Sr. Martiarena. — Justamente, advierta el señor senador que estamos proponiendo un remedio institucional para una provincia gobernada por hombres de nuestro partido.

Sr. Perette. — Efectivamente, ése es mi argumento. Agradezco la acotación del señor senador Martiarena porque eso es justamente lo que sostengo: que al defender la autonomía provincial,

al sostener la necesidad de que esa provincia no pierda su vigencia popular y soberana, estamos dando una prueba de que no defendemos un color partidario, sino que defendemos un principio institucional, un régimen autonómico, una vigencia federalista, lo que implica un compromiso para todos.

Es evidente que el Poder Ejecutivo ha hecho bien en elevar estos antecedentes, pero también coincide con lo expresado por el señor senador Grubisich en el sentido que el señor ministro del Interior debería estar presente en esta sesión para ampliarlos.

El Poder Ejecutivo no pide la intervención, pero en la parte final del mensaje número 290 dice lo siguiente: «El Poder Ejecutivo deja librado al criterio de vuestra honorabilidad determinar si el caso planteado encuadra dentro de los supuestos previstos por el artículo 69 de la Constitución Nacional».

Es decir, no pide la intervención pero es el «vestíbulo» del enjuiciamiento.

Y creo que el Poder Ejecutivo comete un error. Nadie desconoce todos los problemas provinciales que se han producido desde el 25 de mayo en los últimos tiempos y se han ido superando. Cito uno como ejemplo: el caso de Mendoza. Y esos problemas deben superarse en todas partes, porque el conjunto de las autonomías hace al accionar eficiente del país.

En ese sentido, señor presidente, considero que el señor senador Cáceres, con cuya requisitoria somos absolutamente solidarios, ha señalado con acierto la realidad económica, social y política de Formosa.

No creo que el Poder Judicial esté cuestionado, ya que ha cumplido precisamente con un deber constitucional.

Nosotros tenemos adoptada la forma republicana de gobierno.

Del Valle señala que «la república es la comunidad política organizada sobre la base de la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo de su administración».

En nuestro sistema existen —añade— los departamentos de gobierno limitados y combinados. Los principios inherentes de la forma republicana son: la soberanía del pueblo por medio del sufragio; la responsabilidad de los funcionarios públicos ante sus comitentes; la publicidad de los actos de gobierno; la renovación periódica de los funcionarios públicos y la separación de poderes.

«Lo esencial —lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia— es que cada uno de los poderes públicos se desenvuelva bajo su régimen legal y sin ultrapasar los límites precisados dentro de la base de su institución.» (Ver Corte Suprema, tomo 155, 299-30.)

Dicha separación, y el concepto moderno lo va ahondando cada vez más, no debe impedir una

necesaria y armoniosa cooperación entre ellos, ya que todos juntos deben proveer a realizar eficazmente las funciones estatales que, de otro modo, se podrían ver imposibilitadas.

En materia de intervención, señor presidente, los artículos 59 y 69 de la Constitución prevén las cláusulas. «El texto de 1853 comprendía en las atribuciones de la Corte Suprema la decisión de los conflictos entre los diferentes poderes de una misma provincia.» Eso fue suprimido en la reforma de 1860.

El artículo 69 de nuestra Constitución Nacional prevé dos tipos de intervención: la intervención reestructurativa y la intervención ejecutiva. La intervención reestructurativa se produce cuando está subvertida la forma republicana de gobierno y es necesario que el poder federal lleve su acción suprema a tal o cual provincia donde ello sucede, para restablecer y garantizar dicha forma de gobierno.

La intervención ejecutiva prevé las hipótesis de que ocurran algunos de los otros casos previstos por el artículo 69, que obligan a proceder al gobierno nacional como ellos determinan: repeler la invasión exterior o a requisición de las autoridades provinciales para sostenerlas o restablecerlas.

Aquí, en este caso, estaríamos en presencia de una típica expresión de intervención reestructurativa; es decir, de esa intervención calificada antes y configurada precedentemente.

Se ha señalado por destacados autores, y esto debe medirse, como se ha dicho hoy aquí en este debate, «que es la más extraordinaria y grave medida que puede tomar el gobierno de la Nación cuando las instituciones provinciales están hondamente desnaturalizadas y corrompidas y no haya manera alguna, dentro de su juego regular, para normalizar y restaurar su funcionamiento regular».

No es esto, precisamente, lo que ocurre en la provincia de Formosa y agrego este textual pensamiento doctrinario: «La acción tuitiva del gobierno de la Nación es en tal caso y debe ser imperiosamente reclamada por circunstancias excepcionales que ponen en serio peligro o en visible descrédito a la forma republicana de gobierno, que exige a las provincias mantener ese sistema».

Una intervención reestructurativa entonces, por consiguiente —advuértase—, debe ser motivada sólo por circunstancias que realmente sean así —extraordinarias y graves— y no por transitorias y leves complicaciones en la vida institucional y política de las provincias, cuyos correctivos puedan hallarse dentro de sí mismas.

Se refiere la doctrina a la necesidad de lograr recursos correctivos y remedios que se pueden lograr en la propia provincia de Formosa.

«No podía ser de otro modo en un Estado federal cuya base ha sido y es la “autonomía preexistente de las provincias”, conservada por ellas sin más limitaciones que las provenientes de la

naturaleza de los fines de nuestra ley suprema. Porque si la regla fuera que el poder federal puede intervenir sin mayores motivos y frecuentemente en las provincias, las fórmulas constitucionales que estructuran nuestro federalismo serían groseras mistificaciones y aun ridículos desmentidos a los propósitos que presidieron la Organización Nacional.»

Tengo aquí señor presidente —sobre mi banca— una serie de citas doctrinarias y jurisprudenciales para abonar los conceptos que he enunciado. Afirmo que el Poder Ejecutivo ni siquiera ha aludido al «factor decisivo» para demostrar que está dada la situación grave y excepcional prevista por el artículo 69 de la Constitución.

Los argumentos invocados habilidosamente por los hombres del sector de la mayoría no tienen la pujanza decisiva para llevar, por lo menos hasta aquí, ese convencimiento que es indispensable.

Los argumentos dados por el señor senador Cáceres y abonados por los demás señores senadores, en defensa de esa autonomía y en contra de este proyecto de intervención, están demostrando la improcedencia de la medida.

Defender, después de siete años, la autonomía de un gobierno constitucional ha de ser seguramente un imperativo de todos.

No sabemos quién puede ser el destinatario futuro de este mal precedente, y queremos evitarlo. Confío en la ecuanimidad de todos, pero creo que deben agotarse las instancias.

El mismo proyecto de intervención ni siquiera tiene plazo de duración, de cumplimiento ni de convocatoria a elecciones.

Y por último, señor presidente, significaría castigar a uno de los poderes, el Poder Legislativo, por haber cumplido con el cauce normal y constitucional que le fija la ley suprema de la provincia de Formosa.

Señor presidente: estoy seguro de que nadie quiere un episodio de esta índole; de que a todos nos cuesta mucho tomar una medida en este sentido.

Estamos, sí, a tiempo para tomar una medida de carácter preventivo y para agotar las instancias, y en ese sentido confío en el patriotismo de los formoseños y en la sabiduría de los miembros de este Parlamento.

No votemos esta intervención. Abramos la última instancia, y así habremos demostrado una vez más pasión por las grandes soluciones de la República.

Nada más.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: a esta altura del debate, luego de haber escuchado las razones invocadas prácticamente por casi todos los señores senadores de los otros bloques; después de haberme sentido un poco afectado, con

la invocación de que estamos en derrota y de que nuestros argumentos han sido pulverizados; luego de advertir que esta noche se pretende ejercer una especie de docencia que intenta ser de corte democrático para enseñanza del Prejuli, confieso que voy a extremar el rigor de mis palabras y la cautela de mis razonamientos porque comprendo que debo intentar cambiar la convicción equivocada que han expresado los señores senadores.

Yo estimo que los informes que han hecho los señores senadores Fonrouge y Díaz Bialek han sido claros. Tal vez no han advertido los demás señores senadores que ellos hacían referencia a los mensajes del Poder Ejecutivo y que era ineludible al apreciar las argumentaciones de nuestros representantes tomar bien en cuenta los términos de esos mensajes y la documentación a que ellos se referían.

En contra, se han manejado argumentos efectistas pero infundados. Se ha presentado la situación de Formosa como si no existiera un conflicto de poderes sino sencillamente el capricho de un gobernador que se resiste a acatar la decisión de una Legislatura que, se dice, ha actuado dentro de la Constitución y de la ley. Todo esto es equivocado. Formosa no desencadenó el episodio de la madrugada pasada como un hecho aislado de su civismo de los últimos tiempos. En Formosa se está viviendo un clima de tensiones y una situación de tiranteces que son notorias, que han tenido repercusión periodística y que han tenido expresión en el desenvolvimiento institucional de sus órganos de gobierno.

Debo decir que lamento hacer esta afirmación porque, como se lo aclaré al señor senador Perette, están involucrados hombres de la misma extracción política de la cual nosotros procedemos. Pero en Formosa el gobierno ejercido por estos hombres de nuestro partido —por situaciones que no voy a juzgar en este momento y cuya explicación alcanzará cada uno de nosotros según su propia conciencia— el gobierno, digo, no se ha desenvuelto desde el 25 de mayo hasta ahora dentro del clima de orden y con las perspectivas de eficacia que todos anhelamos y esperamos de los gobiernos de provincias instalados en virtud de la aplicación del principio de la soberanía del pueblo.

Esto lo sabe toda la República y, repito, ha tenido repercusión periodística. Más aún: quienes aquí nos sentamos, que vivimos casi permanentemente en el diálogo político y en la información política, lo sabemos de mil maneras. Me sorprende que algunos de los señores senadores, que reconocen y confiesan que esta misma tarde han dialogado con señores legisladores provinciales venidos de Formosa, afecten desconocer esta realidad, que no es episódica de ahora, sino que se viene arrastrando desde hace un largo tiempo.

Lo que sucede ahora es que esta situación ha hecho crisis. El gobernador de la provin-

cia, jaqueado por una Legislatura que no comprende o que no quiere comprender o que se equivoca al interpretar las intenciones del gobernador, ha llegado a un momento que ha sido invitado por la Legislatura de Formosa para que en el recinto de ésta se busque una solución. Y cómo será el clima de tensiones existentes —esto está en todos los diarios, mi información procede del periodismo— que el gobernador fue coaccionado en el recinto por la Legislatura para que diera su consentimiento a una licencia de seis meses, condición que ponían los diputados de Formosa como medio para solucionar así, bastante artificiosamente, un problema que no puede tener esa clase de solución.

¿Qué ha pasado después? El clima de oposición entre esa Legislatura y el gobernador de Formosa se ha agudizado hasta el punto de que ha sido total la falta de colaboración de los legisladores con los propósitos del Ejecutivo y ha sido total la falta de comprensión de éste con relación a las aspiraciones expresadas por los legisladores de esa provincia.

Es decir, que ha venido generándose un proceso de tensiones, de irregular funcionamiento de los poderes, desde hace un largo tiempo. Luego ha ocurrido un episodio, que también ha tenido divulgación periodística, que consistió en que uno de los señores diputados fue acusado de encontrarse sometido a proceso y con pena privativa de la libertad dictada por un juez de extraña jurisdicción, y la Legislatura de la provincia, que recibió un mandato judicial para establecer el desafuero de ese legislador, no quiso otorgarlo. Hubo después un confuso suceso de secuestro de ese mismo legislador, que apareció depositado maniatado a pocas cuadras de una comisaría en la ciudad de Resistencia, para que no quedara ninguna duda de que quien lo había secuestrado no había cometido un simple acto delictivo, sino un acto político, para poner a ese legislador a disposición de un juez de Resistencia que requería su captura.

Esto era confuso en cuanto a las manifestaciones del episodio, pero es claro en cuanto a que pinta un clima de subversión institucional.

¿Qué ha ocurrido después, todavía? Ha ocurrido que el gobierno, ante el disloque de sus relaciones con la Legislatura, se ha dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación para solicitar que éste nos pida a nosotros la intervención únicamente del Poder Legislativo. Es otro de estos sucesos extraños que demuestran cómo en la provincia de Formosa las instituciones no han venido marchando como deben hacerlo en una provincia organizada, para lograr los altos objetivos que todos nos proponemos, que todos aspiramos se consigan en todos los ámbitos de la República.

Después de eso la Legislatura de la provincia ha entendido, no sé si por algún espíritu vindicativo, que debía dar a este señor gobernador

una especie de castigo por el atrevimiento de haber solicitado la intervención del Poder Legislativo, y se ha reunido, convocando para que la presidiera al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, para actuar como tribunal de juicio político.

Los señores senadores de las otras bancadas han hecho mucho mérito de esta circunstancia de que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Formosa no habría hecho sino cumplir con la Constitución y con la ley. Yo me he preocupado de buscar la Constitución de Formosa para enterarme sobre lo que dice con respecto a este famoso juicio político que los legisladores de esa provincia han iniciado contra el gobernador. Me he encontrado con que preventivamente, cuando la Constitución marca el inicio del juicio político, establece que la declaración de que ha lugar al juicio político se hace con citación y audiencia del interesado, si la pidiere. Nadie, en ninguna parte ha dicho —y me consta que no ha sucedido— que se hubiera hecho citación y audiencia del interesado.

Hay quienes quieren interpretar esta cláusula sosteniendo que el interesado es el denunciante; pero ésa es una argumentación especiosa, que no tiene asidero en la letra y en el espíritu de la Constitución, porque lo que la cláusula quiere es que cuando se inicie el juicio político contra el gobernador, vicegobernador, ministros o algunos funcionarios indicados en el artículo 110, se haga con citación y audiencia del interesado, si lo pidiere. Es decir, se refiere al afectado, porque ahí comienza en esta Constitución de Formosa —que está bien en esta materia— el debido proceso con la garantía de la defensa en juicio de quien será sometido a juicio político.

El presidente del Superior Tribunal de la provincia de Formosa se ha avenido a presidir la Legislatura de la provincia constituida en tribunal de juicio político, sabiendo que se había omitido ese dispositivo fundamental para la defensa de los derechos esenciales de la persona.

Más aún. El capítulo se refiere al juicio político y el artículo 116 termina diciendo que «la ley reglamentará estas bases». La Legislatura de Formosa ha comprendido tan rectamente el sentido de esta expresión, que ha propiciado la sanción de una ley reglamentaria del capítulo constitucional que se refiere al juicio político. Ha sancionado esa ley y la ha enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. El gobernador de Formosa, viéndole «las patas a la sota» desde lejos —como se dice—, vetó la ley; pero la Legislatura sabía que debía dictar una ley reglamentaria de las bases del juicio político, y por eso la dictó. Cuando el gobernador vetó la ley, la Legislatura insistió. Pero no esperó siquiera a que venciera el término fijado por la misma Constitución para que la ley reglamentaria del juicio político tuviera plena vigencia, sino que

llevados por una necesidad de tipo político —supongo yo— se apresuraron a constituirse en tribunal de juicio político y a aplicar directamente las normas de la Constitución, con prescindencia de la ley reglamentaria que ellos mismos dictaron.

Es decir, otra vez el presidente del superior Tribunal de Justicia aparece presidiendo este cuerpo, constituido en tribunal de juicio político, que no se realiza con la ley que reglamente las bases del juicio de acuerdo con el mandato expreso de la Constitución.

Esta disposición está expresada en la Constitución para cumplirla en todas las instancias establecidas, como las normas que deben regir las relaciones de los hombres de Formosa con los poderes públicos y a los poderes públicos entre sí.

Hay nuevamente una anomalía, una irregularidad patente en las relaciones entre los poderes públicos del Estado. Quiero dejar aclarado y establecido que cuando yo digo esto creo que estoy repartiendo bien el juego. No hablo a favor ni en contra del gobernador, de la Legislatura o del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Formosa; estoy hablando a favor del pueblo de Formosa, que tiene derecho —lo digo con plena responsabilidad y conciencia— a que los hombres que han surgido de las elecciones democráticas que hemos realizado, de las que procedemos todos, con la autenticidad de ese título, a que esos hombres que salen de nuestra propia extracción, cumplan con la Constitución, la ley y los altos objetivos que se ha propuesto el movimiento peronista para el gobierno de la República. (Aplausos.)

Todo esto que relato ha creado en la población de Formosa un motivo de incertidumbre, un estado de desaliento y también situaciones de violencia. Yo supongo, de buena fe, porque le tengo mucho respeto al señor senador Cáceres, que tal vez la circunstancia de su viaje a la Capital o el no estar quizá próximo al oficialismo formoseño, le hayan impedido advertir que esa situación existe. Existe, señor senador. Hay grupos que muestran su antagonismo no solamente provocándose de palabra, sino también de hecho. Hay gente que está dispuesta a jugarse por el gobernador de Formosa y gente que está dispuesta a hacerlo contra el gobernador y por la Legislatura de Formosa. Hay gente que se ha complicado en el secuestro de un diputado para llevarlo a Resistencia, y quienes también están dispuestos a salir en defensa de ese diputado, inclusive con armas en la mano.

Es decir, que hay una situación que no digo yo que sea tan explosiva como para haber llegado la sangre al río o la guerra a las calles, pero está creando un clima acentuado de irregularidad y de disenso que debemos considerar y tener bien presente en esta oportunidad, cuando examinamos la situación de Formosa.

A eso hay que agregar un estado de inercia en los poderes públicos. Por todas estas cuestiones, el gobierno de Formosa no ha logrado compaginar un plan de acción eficiente y suficiente de acuerdo con la realidad económico-social de esta hora, para contribuir al progreso de esa provincia. Esto es algo que debemos tener presente, porque bien han dicho los señores senadores que debemos apreciar esta situación a la luz del origen de este gobierno en todos sus poderes, que nosotros en cierto sentido estamos juzgando. Este gobierno procede de una auténtica expresión de la voluntad popular, y el pueblo de Formosa no ha querido consagrar gobernantes para que produzcan esta serie de episodios que escandalizan a la República y nos afectan a todos nosotros, sino que ha querido elegir gobernantes para que se pongan con todo entusiasmo a trabajar en concordia, inclusive tendiendo la mano a los adversarios como hacemos nosotros en todos nuestros debates y en cuanto oportunidad se presenta, procurando todos buscar de buena fe los caminos más adecuados para lograr realizaciones de bien público.

Infortunadamente no es esto lo que está ocurriendo en Formosa. De ahí que cuando los señores senadores de otras bancadas, tal vez con una reminiscencia de ese cariño por el federalismo que sentimos todos los provincianos, digan que aquí se trata de avasallar la autonomía de una provincia —usando un término más agresivo tal vez que los que aquí hemos dicho—, no es ésa la realidad. No vamos a avasallar la autonomía de una provincia. Proponemos la intervención de los poderes del Estado en una provincia que está desquiciada; proponemos una intervención para terminar con los conflictos de poderes y para que este gobierno central, que nosotros representamos y apoyamos, que es emanación suprema de esa voluntad popular libremente expresada, vaya a poner el correctivo que necesitan las autoridades instituidas de esa provincia, para que ella también se sume al esfuerzo común de toda la República en aras de su progreso.

No estamos aquí para hacer cosas que tienen al demonio nuestras propias convicciones. No, señores senadores, nosotros también somos provincianos, también somos federalistas, también queremos la autonomía de nuestras provincias. Y cuando esta tarde nos hemos decidido a interpretar el mensaje del Poder Ejecutivo, en el sentido de propiciar en esta Cámara la intervención federal, amplia, a la provincia de Formosa, lo hemos hecho con una desgarradura de nuestros sentimientos, pero como una necesidad vital para enderezar las instituciones de esta provincia argentina, que queremos igual que a nuestras propias provincias.

En este momento, esa situación a que me vengo refiriendo, a raíz de los sucesos ocurridos, se encuentra en el siguiente estado: el go-

bernador de la provincia, sancionado irregularmente por un tribunal de juicio político no constituido o que no actuó de acuerdo con la Constitución, refugiado en la casa de gobierno y asistido por un grupo de personas que, según dicen ellas, lo van a proteger a toda costa. Y un vicegobernador de la provincia, ungido para que ejerza el Poder Ejecutivo por un tribunal de juicio político, establecido en el local de la Legislatura de la provincia, protegido por otro grupo de personas que lo van a defender a toda costa.

Es decir, que hay aquí un gobierno paralelo y, desde luego, una subversión institucional patente. No vamos a dar razón ni a unos ni a otros. Decimos que este proceso tampoco puede solucionarse por la vía judicial. El gobernador de la provincia ha planteado un recurso de inconstitucionalidad ante los organismos judiciales de Formosa, y no consigue que los tribunales se lo resuelvan. O sea que también los magistrados judiciales —así como el presidente que se prestó para un trámite irregular de juicio político— dan la impresión de que el Poder Judicial no quiere decidir estas cuestiones o, por lo menos, está contribuyendo al caos institucional, por la vía de la omisión de sus deberes.

¿Qué vamos a hacer nosotros frente a esta situación? El Poder Ejecutivo ha hecho bien en enviarnos los mensajes, porque es una demostración de su respeto profundo por la institución parlamentaria. El presidente de la República está informado de todas estas circunstancias. Ha recibido del gobernador de Formosa el pedido de intervención a la Legislatura, y también la información de que ésta pretende deponer al gobernador.

Con estos elementos a la vista, nos dice a nosotros, los senadores y diputados de la Nación: Señores, ustedes están en funcionamiento, de acuerdo con el sistema constitucional que nos rige. Pongo en vuestro conocimiento estas circunstancias para que adopten las medidas eficaces con el fin de conjurar estos males que viene padeciendo la provincia.

El bloque del Frente Justicialista de Liberación asume esta responsabilidad, y el proyecto que ha presentado el señor senador Fonrouge cuenta con el apoyo decidido y franco de toda la bancada. Creemos que frente a la anormal situación que vive la provincia de Formosa el remedio adecuado es la intervención federal. Esa intervención tiene que ser a los tres poderes. Al Ejecutivo, porque no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales de realizar la obra de gobierno para la cual el gobernador fue elegido; por haber pedido la intervención del Poder Legislativo, poniendo de manifiesto el conflicto existente con los señores diputados; por haber resistido o no haber hecho las suficientes tratativas para impedir este juicio político anómalo; y, en definitiva, porque el gobernador de Formosa no aparece como el hombre

idóneo para mantener en vigencia las instituciones de la provincia en un gobierno que debe ser de orden, de paz y de trabajo.

Nosotros, que lo queremos personalmente al compañero Gauna —y perdónenme esta efusión personal—, tenemos que decir estas palabras, que tal vez lo lastimen, pero que no son de juicio de responsabilidad para él, porque ha venido a complicarse en una serie de circunstancias locales que le han impedido desenvolverse posiblemente con toda la aptitud o el anhelo que él tuviera en su corazón formoseño. Pero tenemos la obligación de ver la realidad tal cual es, y de cortar donde haya que hacerlo, si con ello aseguramos las posibilidades de esta provincia, que queremos ver recuperada.

El Poder Legislativo debe ser intervenido porque coaccionó al gobernador para que éste aceptara una licencia de seis meses. Aunque esa coacción no esté perfectamente probada ni figure hasta en la posibilidad de la demostración por los métodos probatorios más estrictos, el solo hecho de que una Legislatura provincial considerara que puede llamar a su seno a un gobernador de provincia para insinuarle una licencia de seis meses está poniendo en evidencia una irregularidad en el funcionamiento de las instituciones, que hace culpables y responsables a los que así proceden.

Además, el Poder Legislativo debe ser intervenido porque tiene en su seno hombres sometidos a proceso y penados, para los cuales ese cuerpo no ha hecho jugar las respectivas disposiciones constitucionales a fin de que la justicia pueda realizarse.

Debe ser también intervenido el Poder Legislativo, porque no se ha sometido a la ley que la Constitución prevé para la formación de juicio político, y ha prescindido de la que dictó oportunamente, en una maniobra que hace elusivo su propio pronunciamiento, para lograr una finalidad de tipo exclusivamente político. Y, finalmente, debe ser intervenida la Legislatura, por cuanto ha estado tan conflictuada en el terreno de las tensiones políticas, que su obra legislativa no se traduce en ningún hecho importante, como merece la provincia de Formosa.

En cuanto al Poder Judicial, sostenemos que su presidente es representativo del poder, y que se ha complicado en un juicio político de dudosa factura, debiendo estar los jueces por encima de toda clase de duda en este sentido.

Más aún; decimos que la intervención debe alcanzar a ese poder, porque de lo contrario resultaría que aquélla no podría apreciar las consecuencias del mal desempeño de los magistrados que se han complicado en estas situaciones, ya que están amparados por la inamovilidad constitucional. Y me refiero tanto al presidente del superior tribunal como a los otros jueces, ante los cuales está interpuesta la demanda de inconstitucionalidad, sobre la cual no hay pronunciamiento.

Entendemos, por sobre estas circunstancias enumeradas, dentro de las que tal vez olvide algunas o desordene otras, que la intervención tiene que ser amplia, porque la provincia necesita reparar sus aparatos organizativos e institucionales; porque ella precisa ponerse en marcha para recuperar el tono de una actividad de gobierno que sea coherente entre los hombres que la constituyen y que conduzca efectiva y positivamente a resultados felices para la población de la provincia de Formosa.

Este es el concepto por el cual, a plena conciencia, elaboramos el proyecto de ley en consideración, y expresamos al Poder Ejecutivo de la Nación, a nuestros pares, a la Cámara de Diputados y a la República toda que cuando se da una situación como la imperante en la provincia de Formosa, por encima de la simple mística federalista, penetramos la necesidad de reparar el daño que se pueda venir ocasionando y la de encauzar las instituciones para bien de toda la República.

Dentro de estas ideas y de estos conceptos que he querido exponer en apoyo de nuestra posición sobre el tema, debo mencionar la alusión que se ha hecho en el sentido de que este proyecto va a afectar el principio de la soberanía popular. Nosotros no lo sentimos así. Al contrario, creemos que de esta manera se respeta dicho principio, porque nosotros somos mandatarios. Y esto es el abecé elemental: el mandatario ejerce el mandato que le da el mandante; si aquél no cumple satisfactoriamente, el mandante debe revocar el mandato y dar la oportunidad de que se establezca un nuevo mandatario que satisfaga sus necesidades. El mandante es el pueblo, el pueblo argentino, y en este caso, más precisamente, el pueblo de Formosa.

Sr. Cornejo Linares. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Martiarena. — Con mucho gusto.

Sr. Cornejo Linares. — Al respecto, quería recordar una frase muy interesante del presidente Hipólito Yrigoyen, la que se suscitó con motivo de la intervención a la provincia de Salta, en 1926. No recuerdo muy bien por qué circunstancias se produjo un cambio de telegramas entre el entonces presidente de la Nación y el interventor Giménez Zapiola, y el presidente Yrigoyen contestó diciendo que la autonomía es del pueblo y no del gobierno. Precisamente, este proyecto de intervención reitera una vez más la autonomía del pueblo de Formosa para que designe autoridades que lo representen dignamente y que puedan traer el progreso y la reconstrucción nacional que anhelamos.

Sr. Martiarena. — No participo del pronóstico un poco dramático que ha hecho el estimado señor senador Cáceres, acerca de que a través de esta intervención se van a frustrar las posibilidades de Formosa. Reconozco que este asunto de las intervenciones a Formosa es como una pesadilla, y que los formoseños tienen razón de

recelar de ellas porque han tenido que padecer muchas, y tal vez más malas que regulares; ni siquiera diré que buenas.

Pero no creo tampoco que tengamos que medir esta circunstancia que vamos a resolver, con el fácil argumento de que es preferible el peor gobierno que la mejor intervención. Esta es una frase que no corresponde a la realidad. Hay gente que va a gobernar una provincia, o que ha gobernado una nación con un justo título y que ha sido un fracaso. Y hay otra gente que llega a un lugar al cual no pertenece y que por los lazos de afecto que toma, a veces con su propia tarea y otras veces con las personas a quienes comienza a conocer, está dispuesta a rendir lo mejor de su actividad, de su trabajo y de su inteligencia en favor del lugar donde debe desempeñar sus funciones.

No hay una norma rígida. Nos manejamos dentro de lo humano, y en lo humano se admiten y están presentes todos los matices y todas las posibilidades.

No hagamos argumentos de esa supuesta posibilidad de frustración. Pensemos que todos nosotros estamos imbuidos de un mismo concepto altamente patriótico y digno para la función que nosotros mismos estamos realizando para el país. Pensemos que nosotros vamos a ser los celosos guardianes del desempeño de quienes deban ejercer la intervención en Formosa. Y les aseguro a los señores senadores que, así como no nos ha temblado el pulso hoy para indicar el camino que corresponde a nuestros compañeros de esa provincia, tampoco nos va a temblar para volvérselo a indicar a quienes deban ejercer las funciones en esta provincia, cuya intervención proponemos.

Yo no quisiera molestar a los señores senadores de la bancada radical, pero confieso que no puedo resistir un poco a la tentación de hacer una pequeña historia para mostrar cómo cambian los conceptos.

Una situación muy parecida a esta de Formosa ocurrió en mi provincia —y alguna vez he aludido a esto, en este recinto, en una interrupción accidental— hacia 1963/64. Entonces, bajo el signo de la proscripción gorila, los peronistas no pudimos concurrir a los comicios con nuestras propias siglas. Lo hicimos bajo siglas prestadas y tuvimos la adhesión de nuestros conciudadanos, que, masivamente, en Jujuy nos dieron el triunfo. Como ese triunfo violaba las reglas del juego nos anularon los votos, y se instaló un gobierno usurpador, de minoría, no representativo de la soberanía del pueblo, que, por las circunstancias del momento, fue reconocido por las autoridades centrales como el gobierno a través del cual debían mantenerse las relaciones de la Nación con mi provincia.

Sucedió que nosotros, en una Legislatura de treinta miembros, teníamos dieciocho diputados, que se jugaron las bancas y enjuiciaron al gobernador de la provincia, gobernador usur-

pador. Y probaron los cargos, uno por uno, en un juicio político de resonancia nacional, y lo suspendieron en el ejercicio de su mandato. Pero aun funcionando el Congreso de la República, en 1964, no conseguimos nosotros que se reconociera el principio de la soberanía del pueblo y se mandó una intervención en lugar de ponerlo en el sillón de gobernador al presidente de la Legislatura.

Han pasado los años —ésta es una remembranza un poco personal—, pero yo digo que si cambian los tiempos pueden cambiar también las fisonomías y un poco las ideas. Pero no las cambiamos tanto que no nos sigamos aferrando a las cosas más importantes y fundamentales de la vida. Digamos, frente al caso de Formosa, que no tenemos que aplicar el mismo cartabón de Jujuy; que apliquemos el principio fundamental que por encima de cualquier circunstancia personal, de los hombres que ejercen el gobierno, es rigurosamente cierto que debemos respetar los principios de la soberanía del pueblo y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los gobiernos sean eficientes, para que la paz y el orden reinen en todas las provincias donde los gobernantes deben desempeñar sus funciones. Y para que el progreso sea el signo de esta evolución en la provincia de Formosa, bandera que debe flamear no como una humilde banderita en el Norte de la República, sino como emblema de una prosperidad verdadera que todos queremos para los formoseños.

Voy a terminar, señor presidente. Cuando tengo que hablar sobre estos temas que rozan las cuestiones políticas, confieso que me dejo ganar un poco por la vehemencia y pido disculpas a los colegas de las otras bancadas. Les pido si que crean que los hombres que nos sentamos aquí, en la bancada del Frente Justicialista de Liberación, obramos con absoluta sinceridad de propósitos. No queremos trastornar los principios fundamentales de la República. No queremos avasallar las autonomías provinciales. Queremos respetar el principio de la soberanía del pueblo. Pretendemos fundar y realizar gobiernos eficientes que conduzcan a la Nación y a las provincias por los mejores senderos de la prosperidad.

Eso es lo que a nosotros nos guía; no sé si nos equivocaremos o no en esta solución que indicamos. Pero les aseguro a los señores senadores que en los niveles del movimiento justicialista y también del gobierno de la Nación se han tentado las soluciones de conciliación para buscar que de alguna manera quienes ejercen las funciones de gobierno en la provincia de Mendoza comprendan esta realidad...

Sr. Frugoli. — De Formosa, señor senador...

Sr. Perette. — Ya se ve que la tiene degollada a Formosa. (Risas.)

Sr. Martiarena. — ¡No, señor senador Perette! Voy a recoger una alusión que usted hizo para decirle que no comparto su criterio de que,

como a través de tratativas se arregló Mendoza, hagamos otras más para ver si arreglamos la situación de Formosa.

Vamos a Formosa, que está en un punto crítico de su destino, con la decisión de llevar a un hombre...

Sr. Perette. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Martiarena. — Sí, señor senador.

Sr. Perette. — Pero el caso de Formosa no es más crítico que el de Mendoza, donde al gobernador lo había expulsado el propio partido, que lo tenía liquidado, y el congreso justicialista no lo recibía. No obstante, arreglaron la situación. ¿Cómo no van a arreglar ahora este problema! (Risas.)

Sr. Martiarena. — Le agradezco al señor senador Perette la confianza que tiene en nuestra capacidad para el arreglo, pero le pido, usando el mismo argumento, que se dé cuenta que si llegamos a pedir la intervención a la provincia es porque consideramos agotada nuestra capacidad para resolver la situación.

Nada más, señor presidente.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente: creía que éste era un debate casi agotado con las primeras palabras del señor senador Martiarena. Considero que ha expuesto el problema con mucho conocimiento del mismo, por la participación que tiene en él, no sólo como legislador, sino en virtud de su propio rol político. De ahí la importancia de sus palabras y la valoración que debemos hacer de ellas.

Pero entiendo que toda su información carece de la substancia probatoria con que debe contar este honorable cuerpo para decidir una medida de esta naturaleza. Además, señor presidente, eso no enerva el reclamo de «agotar la instancia» para poder realizar el último esfuerzo —no de un sector, sino de todos— en favor de la propia provincia de Formosa.

Con respecto al Poder Judicial, el artículo 112 de la Constitución de la provincia de Formosa dice concretamente «que cuando el acusado fuera el gobernador o el vicegobernador, el presidente del superior Tribunal de Justicia presidirá las sesiones de la Legislatura». Es decir que en el problema planteado se ha cumplido con el precepto constitucional establecido en el artículo 112.

Con respecto a los hechos mencionados relativos al Poder Legislativo, surge a través de las palabras del señor senador Martiarena —y lo digo respetuosamente— que son presunciones, apreciaciones, porque él mismo reconoce que no tienen la validez de la prueba ni el carácter de elementos suficientes y decisivos. Y tanto es así que ni el propio Poder Ejecutivo dice que debe intervenir a Formosa, porque si lo creyera necesario no habría usado la coartada —que no

creo que lo pueda hacer, porque sé que se maneja con nosotros con la misma franqueza con que nosotros nos manejamos con ese poder— de haber elevado un mensaje de esta índole para que seamos los verdugos de la autonomía de la provincia de Formosa.

En cuanto a la situación de la provincia de Mendoza...

Sr. Martiarena. — De Formosa, señor senador.

Sr. Perette. — Es que yo lo quiero ayudar al señor senador. (Risas.)

En cuanto a la situación de la provincia de Formosa, decía, el hecho de referirse «al cumplimiento de los planes del gobierno», evidentemente no constituye un argumento de validez tal que pueda destruir la doctrina, el pensamiento, el texto y el espíritu de la Constitución Nacional. Absolutamente no. Eso sí que sería un gravísimo precedente que aquí se ha señalado porque quedaría abierta la «fabricación» de conflictos arbitrarios discrecionalmente, cuando se quiera avasallar cualquier distrito o cualquier autonomía.

En cuanto a lo que el señor senador ha señalado desde el punto de vista político, con respecto a los años 1963/64, no quiero seguirlo al señor senador pero sí sé que en el año 1965 fue electo gobernador de la provincia de Jujuy, y fue respetado y garantizado en su acción por nuestro gobierno. Por otra parte, conozco la labor que ha tenido en la provincia y su acción política con respecto a todos esos matices políticos.

Pero yo podría decir, señor presidente, lo que se hizo durante el gobierno peronista con respecto a la provincia de Corrientes y también podríamos referirnos a lo que ha pasado con legisladores a quienes, por discrepar, se les aplicaron sanciones en la Cámara. Pero esto no es la solución, señor presidente.

Sr. Fonrouge. — Y tendríamos que hablar también sobre lo ocurrido desde 1916 en adelante.

Sr. Perette. — Entonces tendríamos que hablar también desde las épocas del fraude de todos los tiempos.

Sr. Fonrouge. — Esa es una palabra que está siempre presente, y de la que se abusa.

Sr. Perette. — Nunca la he usado y hoy se la he querido donar.

Señor presidente: quiero volver a repetir y se lo expreso con el gran respeto y afecto que le tengo al señor senador Martiarena, con toda la autoridad que tiene como presidente del bloque, que cuando alguien defiende una posición distinta no es cuestión de atacar o agredir porque para esto tenemos todos y cada uno de nosotros razones y nuestras cicatrices.

En esta tarea, señor presidente, todos tenemos la obligación de superar lo que nos ha ocurrido y saber lo que vamos a realizar.

Entiendo, señor presidente, que los fundamentos intervencionistas que se han dado carecen

de validez y que no se han dado argumentos, pruebas ni elementos de juicio suficientes para desvirtuar los planteos que hemos formulado respetando íntegramente las razones jurídicas que han formulado los señores senadores Fonrouge y Díaz Biale, porque no creo que podamos pretender nosotros tener el monopolio de la verdad.

Con respecto a lo que ha ocurrido en Formosa, a través de las palabras de nuestro querido compañero de bancada, el señor senador Cáceres, que está en permanente contacto con el distrito, no es Formosa un *far west*. Hay en el país lugares donde existen problemas muy graves y el propio gobierno y los hombres del sector oficialista han tenido que adoptar medidas serias y fundamentales relacionadas con la llamada depuración ideológica.

Sr. Martiarena. — Ahora somos todos oficialistas, señor senador.

Sr. Perette. — Avise, compañero; no.

Sr. Martiarena. — He estado presente cuando el general Perón les ha ofrecido la llave de la Casa de Gobierno y han estado todos contentos en aceptarla; de manera que somos todos oficialistas.

Sr. Perette. — Con este cuentito de la habitación y de la llave, lo que quiere Perón con toda habilidad es que todos entren en la pieza, pero él se va a quedar con la llave. (*Risas.*)

Por eso, señor senador, comprenda usted que este asunto del país no se arregla así tan fácilmente. Hacemos bien en dar a todas estas cosas un matiz afectuoso que no debemos perder nunca. Este asunto de la decisión de disponer una sala para que vayan los hombres de los partidos es un aspecto; pero no es una función que signifique una confusión de los partidos, porque si así lo hiciéramos habría una doble alteración: de los que dejarían de cumplir su función opositora para la cual los ha elegido el pueblo, y del gobierno, confundiendo su misión.

Sr. Martiarena. — ¿Me permite...? Lo importante no es la sala, sino el diálogo.

Sr. Perette. — No. Lo más importante es el encierro. (*Risas.*)

Sr. Martiarena. — Ese es su temor, y ya sabrá por qué.

Sr. Perette. — Lo verdaderamente importante es establecer los límites y bases claras de las coincidencias y lograr las soluciones. Nuestra misión no está en la sala, sino en el Parlamento. Los hombres de los partidos pueden tener todo el cambio de ideas, diálogos y el aporte de opiniones, pero no es con una sala de la Casa de Gobierno ni con un consejo de Estado —que no está en la Constitución— como se va a resolver el problema del país.

Digo esto porque hace unos instantes afirmaba que conocemos los problemas políticos e institucionales que existen en la República, como los tenemos en todas las fuerzas políticas. Pero, señor presidente, debemos entender que

en este caso estamos defendiendo un sistema de autonomía y de federalismo que hace —lo he dicho antes que ningún otro— a la verdadera convicción de todos y a cuyo respecto afirmo que no significa un intento de avasallamiento de nadie: ni del Poder Ejecutivo ni de los legisladores que lo sostienen. De manera que no se puede pretender ubicar nuestra posición en ese terreno.

Y digo más, señor presidente. Afirmo que nuestro proyecto, anunciado por el señor senador de la Rúa, es el que va a determinar nuestro voto, y ello sin perjuicio de que a este proyecto, que tiene dos artículos, nosotros agreguemos la proposición de que la Comisión de Asuntos Constitucionales se constituya en la provincia de Formosa para hacer el estudio de la situación creada y luego, en virtud de ese informe, se pronuncie la Cámara.

Con esto no negamos a nadie la verdad que ha pronunciado, ni el argumento jurídico, ni la situación de hecho. Después de eso cada uno podrá dar su pronunciamiento, pero no hay nadie que le pueda quitar el derecho de haber agotado hasta la última instancia.

Por estos fundamentos, y con mi mayor respeto para todas las ideas, señalo que esto tiene importancia para hoy y para el futuro, y nosotros vamos a cuidarlo. (*¡Muy bien!*)

Sr. Frugoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Frugoli. — He escuchado al señor presidente del bloque de la mayoría con la atención que me merece su equilibrio y su inteligencia, y dispuesto a cambiar de opinión si la solidez de sus argumentos me determinaba a ello.

El señor senador ha sintetizado los motivos en virtud de los cuales corresponde la intervención a los tres poderes de la provincia de Formosa. Ha señalado que corresponde la intervención al Poder Legislativo porque no dictó la ley reglamentaria correspondiente, porque ejerció presión sobre el gobernador para que solicitara una licencia de seis meses, y porque existirían delincuentes en su seno. Al Poder Judicial, porque su presidente tiene carácter representativo y habría incurrido en actos que invalidan la posibilidad de su actuación en este suceso, y porque algunos jueces aún no se habrían pronunciado sobre un recurso presentado por el señor gobernador. Y en lo que se refiere al Poder Ejecutivo, porque estaríamos frente a un acto de inepticia en el desempeño de funciones, no determinada por falta de condiciones personales del señor gobernador sino por una serie de circunstancias desfavorables que le han impedido cumplir una tarea constructiva al frente del gobierno de la provincia; y, además, porque habría solicitado la intervención.

No pongo de ninguna manera en duda, y no lo he hecho nunca, la sinceridad de propósitos con que actúan los señores senadores de la ma-

yoría, pero confieso que ninguno de estos argumentos me convence de que haya violación del régimen republicano, que es el supuesto que debemos tener en cuenta para proceder a intervenir una provincia.

La exposición del señor senador ha tenido la fluidez con que suele él pronunciarse en esta Cámara, pero reitero que no ha aportado la solución necesaria al fondo del problema. De ahí que la posición expresada por mí al principio de este debate continúe siendo la misma. Creo que no procede de ninguna manera la intervención federal a la provincia de Formosa.

Por otra parte, insisto en que con la intervención se allana la autonomía provincial y además se viola el principio de la soberanía popular al sustituir los legítimos representantes del pueblo. No necesito argumentar por qué son legítimos, pues todo el mundo sabe cómo fueron elegidos. Tampoco puedo aceptar una aplicación total de la teoría del mandato, que es una figura jurídica de derecho privado, en el ámbito del derecho público.

Sr. Martiarena. — Era más una figura que una aplicación.

Sr. Frugoli. — Lo descuento, pero quiero explicar mi posición.

Evidentemente, son situaciones distintas, pero tenemos que ajustar nuestras decisiones al orden normativo constitucional, que está por encima de todo ese tipo de figuras jurídicas.

En consecuencia, profundamente convencido de estar cumpliendo un deber fundamental, voy a oponerme al proyecto de intervención a la provincia de Formosa.

Sr. Sapag. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Sapag. — No obstante haber oído con detenimiento los argumentos del bloque mayoritario, insisto en la designación de la comisión senatorial de siete miembros. Así mismo, insisto en que se autorice a la Presidencia para designar los integrantes, a fin de que dentro de las setenta y dos horas traigan un informe completo a esta Cámara para que se resuelva en definitiva.

Sr. Pose. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Pose. — Señor presidente, señores senadores: en verdad, las palabras muy bien expresadas por el señor senador Martiarena, dichas con toda objetividad y sencillez diría, casi me convencer de que es acertado lo que propone el bloque mayoritario. Ha dicho muy bien el señor senador Martiarena que el Poder Ejecutivo, con todo tino y cautela, ha sido muy objetivo al traernos este problema para que sea el Poder Legislativo quien decida sobre esta escañosa situación. Ello es exacto.

Yo casi estaría convencido de dar mi voto positivo para esta solución, pero siguiendo el

ejemplo del tino y la cautela del Poder Ejecutivo, quisiera referirme a algunas frases del señor senador Martiarena.

Pregunto yo: ¿tenemos derecho a condenar sin escuchar a los acusados? ¿Por qué no obrar con el mismo tino y cautela del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no esperar ese plazo de setenta y dos horas para que sean los mismos legisladores los que nos traigan la convicción absoluta de que ese voto positivo —que yo casi adelanto si es que tengo esa convicción— es el que corresponde?

Me parece una cuestión fundamental, y yo no encuentro razón para que eso no pueda hacerse así y que todos los senadores tengamos la conciencia libre de que nuestro voto ha sido dado con el mismo tino y cautela con que obra el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Allende). — Si no se hace uso de la palabra, esta Presidencia, de acuerdo con el artículo 129 del reglamento del Honorable Senado, dará por cerrada la conferencia y pondrá a votación el proyecto presentado.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Quiero señalar que nosotros hemos presentado un proyecto de declaración que deseáramos sea leído, también, antes de proceder a la votación.

Sr. Presidente (Allende). — Así se hará, señor senador.

—Queda cerrada la conferencia.

7

INTERVENCION A LA PROVINCIA DE FORMOSA

Sr. Presidente (Allende). — Continúa la sesión.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto de declaración presentado por los señores senadores de la Unión Cívica Radical.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

El Honorable Senado de la Nación,

constituido en comisión, ha considerado los mensajes del Poder Ejecutivo nacional de fecha 15 y 16 de noviembre de 1973 relativos a la situación institucional en la provincia de Formosa y ha resuelto aprobar la siguiente

DECLARACIÓN:

Artículo 1º — Declarar que, en virtud de los antecedentes recogidos, no se dan las circunstancias previstas en el artículo 6º de la Constitución Nacional para disponer la intervención federal a la provincia de Formosa, en la cual se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo el señor vicegobernador en virtud de haber sido suspendido el señor gobernador con motivo de los trámites del juicio político previsto en el artículo 110 de la Constitución Nacional.

Art. 2º — Refirmar la decidida vocación federalista de este cuerpo y expresar su deseo de que la Consti-

tución y la ley sean lealmente acatadas por todos en la provincia de Formosa, preservándose su autonomía y el respeto debido a la decisión de la Legislatura.

Carlos H. Perette. — Rubén Osvaldo Cáceres. — Raúl J. Zarriello. — Hipólito Solari Yrigoyen.

Sr. Sapag. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Sapag. — Solicito, señor presidente, que mi pedido de designación de una comisión se tenga en cuenta para la votación.

Sr. Presidente (Allende). — En primer término se tiene que votar el proyecto de ley presentado por el señor senador Fonrouge que fue considerado por la Cámara constituida en comisión. De acuerdo con esta votación, se procederá con los otros temas.

Se va a votar en general el proyecto de ley presentado por el señor senador Fonrouge.

—Se vota y resulta afirmativa

Sr. Presidente (Allende). — En consideración en particular.

—Se votan y aprueban sin observaciones los artículos 1º y 2º.

—Se lee el artículo 3º.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — El artículo en consideración dice: «Comuníquese al Poder Ejecutivo». Propongo que se agregue, a continuación, «a los fines de su cumplimiento».

Sr. Presidente (Allende). — Se va a votar el artículo 3º con el agregado propuesto por el señor senador por Jujuy.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Allende). — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Quiero dejar constancia de que nosotros hemos votado en contra, porque hemos sostenido nuestro propio proyecto.

8

AMNISTIA ELECTORAL

Sr. Fonrouge. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Fonrouge. — En razón de la urgencia del caso, solicito que se trate sobre tablas el orden del día número 91, que está impreso de acuerdo con lo que se me acaba de informar en Secretaría. Se trata de un proyecto de ley venido

en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, sobre amnistía a los ciudadanos infractores por no haber podido votar en las últimas elecciones. Si no se sancionara en esta sesión, ya no tendría objeto, porque vencería el plazo establecido por el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Allende). — En consideración la moción de sobre tablas del señor senador por Buenos Aires. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Allende). — En consideración el orden del día número 91: dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en revisión sobre amnistía a ciudadanos que no votaron en las elecciones del 23 de septiembre de 1973. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley del señor senador Rodríguez y el proyecto de ley en revisión sobre amnistía a todos los ciudadanos que no hubieran emitido su voto en las elecciones del 23 de septiembre de 1973; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja prestéis vuestra aprobación a este último.

Sala de la comisión, 14 de noviembre de 1973.

Alberto M. Fonrouge. — Fernando de la Rúa. — Vicente Leónides Saadi. — Héctor Domingo Maya. — Francisco Eduardo Cerro.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Amnistíase a todos los ciudadanos que fueron considerados infractores por no haber cumplido con el deber de votar el 23 de septiembre de 1973.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ginés Froilán Rodríguez.

FUNDAMENTOS

Señora presidenta:

Iniciada en el país una nueva etapa de su vida institucional con el más amplio sentido de generosidad y olvido, y a los fines de que todos los argentinos puedan participar en el mismo sin las sanciones que por su carácter de infractores a las leyes de elecciones se han hecho pasibles en razón de no emitir su voto el 23 de septiembre de 1973.